

74ª REUNION — Continuación de la 8ª SESION ORDINARIA DE PRORROGA —
OCTUBRE 27 DE 1965

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Rodolfo José Tecera del Franco

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES

ABALO, Raúl
ABDULAJAD, Abraham
AGUINAGA, Carlos
AGUIRRE CÁMARA, José
ALEGRE, Carlos Duval
ALETTA DE SYLVAS, Alfonso R.
ALFONSO, Raúl R.
AMURA, Luis
ANTÓN, Luis
ARANA, Tomás P.
ARIAS, Luis Osvaldo
ARRESTO, Alberto
ARROYO, Ramón F.
AVILA, Eduardo Miguel
BAFFICO, Alejandro O.
BALBI, Isidro G.
BALESTRA (h.), Juan
BELNICOFF, Manuel
BERRINI, Emilio
BIANCHI, Manuel Luis
BILBAO, Saturnino
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALVIÑO, Nélida Renée
CALVÓ, Carlos Alberto
CARO, José Armando
CASAS, David Jorge
CASTELLANOS, Angel Ignacio
CASTILLO, Maximiano
CASTRO, Abel Andrés
CERDEIRO, Alfonso M.
CORAL, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COTTONARO, Carlos Alberto Carmelo
DAMIANI, Salvador
D'ANGELO, Eduardo Antonio
DE CARA, José Eduardo
DEL MATI, Juan José
DEL PERO, Miguel P.
DÍAZ, Diógenes C.
DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
DOMÍNGUEZ, Luis C.
ESPINOZA, Silvano Ramón
FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERREIRA, Jorge W.
FIGUEROA, Jaime Hernán
FIOL, Juan Antonio

FLUIXA, W. Emilio
FREGA, José
GALLO, Carlos Renato
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio
GARCÍA SOLÁ, Héctor J.
GARIBALDI, Alberto
GARÓFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ, Jorge
GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo
GUTIERREZ, Eduardo O.
HARDY, Emilio J.
HARVEY, Ricardo J. G.
HERRERA, Oscar A.
INSÚA, Carlos Raúl
ISLA, Rosaura
IZZETA, Gerónimo Manuel
JAROSLAVSKY, Manuel
JOFRE, Emilio
JUÁREZ, Carlos Arturo
LAVALLE, Mario
LEÓN, Luis Agustín
LUCO, Juan A.
LLAVER, Santiago Felipe
MAGLIETTI, Alberto R.
MARSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MAYA, Héctor Domingo
MERCADO, José Ignacio
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MONTANI, José Jesús Mariano
MONTE, Ricardo Alvaro
MOR ROIG, Arturo
MUNIAGURRIA, Camilo
MURATORI, Eduardo D.
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSITANI, Héctor Francisco
NATIELLO, Roque Oscar Alberto
NIEMBRO, Paulino
OCAMPO, Carlos E.
ORESTE, Raúl
ORTUZAR, Juan Carlos Felipe de
OXENFORD, Rodolfo Kitchener
PATLIS, León
PEDRINI, Ferdinando
PENA, Roberto M.
PÉREZ, Raúl
PÉREZ AZNAR, Ataúlfo
PERNASETTI, Horacio
PESSINO, Felipe

PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor Silverio
PRAT, Longin Osvaldo
PURICELLI, Amadeo
RASINES, Osvaldo Gregorio
RATTI, Luis Carlos
REQUENA, Raúl María
RIANDE, Teresa Noemí
RIERA, Fernando Pedro
RIOBOO, Raúl Ricardo
RISSO, Carlos Saúl Enrique
RIVA, Raúl Edgardo
ROBERTO, Mario
ROCA, Luis Raúl
RODRÍGUEZ, Eusebio
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ KESSY, Cristóbal Cleto
RODRÍGUEZ VAGARÍA, Eduardo
RODRÍGUEZ VIGIL, Francisco Rafael
ROMANO, Benito Vicente
ROMEU VERDIER, Gabriel
ROUZAUT, Adolfo R.
SA, Edgar
SALADO, Francisco A.
SANUDO FREYRE, Clemente R.
SARMIENTO, Nélida Marta
SCHAPIRA, David
SELSE, Jorge José
SERÚ GARCÍA, Alberto
SIMINI, Jorge Alberto
SIMO, Alejo José
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
SPERTINO, Norberto Aldo
STAINOH, Alberto
TACHELLA, Eliberto S. J.
TARULLI, Pascual
TECERA DEL FRANCO, Rodolfo José
THEDY, Horacio Ricardo
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
URANGA, Raúl Lucio
URTEAGA, Benito Florentino
VACA LOBO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VAZQUEZ, Aurelio
VAZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VIDELA, Roberto
VILLAMAYOR, Roberto A.
VINTI, Gerónimo
VIÑALS, Fernando J.

ZADOFF Arón
ZARRIELLO Raúl Jorge

AUSENTES, EN COMISION:

ARRANCARIA Félix d.
ORTIZ HERNANDEZ, Angel H.

AUSENTES, CON LICENCIA:

BACCAY, Rodolfo D.
BAZAN RIVEROS, Sijifredo Antonio
BELGRANO KAWSON Guillermo A.
CANTONI Angel Serafin
ELENA, Reinaldo

FERRARI, Luis
NOUGUES, Isaiar J.
ROSITO, M. Oscar

AUSENTES, CON AVISO:

ANTUN Julio
ARBALLO Enrique Jorge
BARCAI Abdo
BAR JONCEVO Gerardo Eusebio
CAIALAN Guillermo
COENEJO LYNARES Juan Carlos
HARRINGTON Luis J. D.
LOZANO Martín
LLORENTE Hector

MENDEZ DOYLE, Abel Victor
OBREGON, Pedro A.
SCH AFFINO Nicolás Hipólito
VILLALBA Mario Ramón
ZANONI, Juan Claudio

AUSENTES, SIN AVISO:

ACHIAR, Juan C.
CHRIETE Jorge J.
GALEANO Roberto A.
GILFESTHRON Eduardo R.
MASSOLO, Eduardo A.
MASTOLORENZO, Vicente
MIGNO, Mario

SUMARIO

- 1.—Continuación de la sesión (Pág. 4818.)
- 2.—Moción del señor diputado Alfonsín sobre prórroga del término acordado a las comisiones para producir dictámenes. Se aprueba. (Pág. 4818.)
- 3.—Contrato de trabajo. Termina la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo (orden del día 211) (Pág. 4818.)
- 4.—Moción del señor diputado Alfonsín de pasar a cuarto intermedio. Se aprueba. (Pág. 4857.)
- 5.—Apéndice:
Sancion de la Honorable Cámara. (Pág. 4857.)

—En Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de octubre de 1965, a la hora 17:

1

CONTINUACION DE LA SESION

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa que en este momento hay en la casa 110 señores diputados y 55 en el recinto.

Como debe procederse a la votación del artículo 36 del proyecto de ley contenido en el orden del día 211, si hubiere asentimiento se procederá a pasar lista.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se procederá a pasar lista.

—Mientras se pasa lista, a la hora 17 y 25:

Sr. Presidente (Mor Roig). — Con la presencia de 111 señores diputados, continúa la sesión.

2

MOCION

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una indicación previa, tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — La Comisión de Labor Parlamentaria ha resuelto proponer a la Honorable

Cámara que se autorice a las comisiones a producir despachos hasta el día 29 inclusive, en el caso de proyectos venidos en revisión del Honorable Senado, y hasta el día 28, inclusive, en el caso de proyectos que ya tengan despacho de una comisión especializada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración la indicación del señor diputado Alfonsín. Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 100 votos; votan 107 señores diputados.

Sr. Vázquez Pol. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿A qué efectos, señor diputado?

Sr. Vázquez Pol. — A los efectos de formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado Vázquez Pol.

Sr. Vázquez Pol. — Señor presidente: de acuerdo con lo dispuesto en el plan de labor, la Cámara va a trabajar hasta el sábado a las 24. Sin embargo, teniendo en cuenta que en distintas comisiones hay una serie de proyectos que se están estudiando y que sería necesario aprobar antes de finalizar el periodo legislativo, hago moción para que el domingo 31 se sesione desde las 10 hasta las 24.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia le informa, señor diputado, que la prórroga fue de 30 días. En consecuencia, vence el 30 de octubre a las 24, es decir, el sábado próximo.

3

CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa la consideración en particular del orden del día 211, relacionado con el contrato de trabajo (1).

Correspondería votar el artículo 36, conforme al despacho de la comisión.

Sr. Rouzaut. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rouzaut.

(1) Véanse los Diarios de Sesiones del 20, 21, 22, 26/27 de octubre de 1965, páginas 4604, 4667, 4684 y 4766, respectivamente.

Sr. Rouzaut. — Señor presidente: la iniciativa del señor diputado García, tendiente a la redacción de un agregado al artículo 36, evidentemente pretende garantizar la estabilidad del empleado o del obrero que ha ejercido el derecho de huelga.

En este problema debemos tener presente que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional ha hecho una distinción entre el empleo comercial y el empleo público. Con respecto al primero, dice: «protección contra el despido arbitrario», y con respecto al segundo habla de la «estabilidad del empleado público».

Esto quiere decir que con respecto al empleo privado los constituyentes han dejado al Poder Legislativo libertad de acción para que mediante leyes estableciera los procedimientos a los efectos de garantizar la estabilidad en este tipo de empleo.

El proyecto del señor diputado García, en cierto modo, garantiza esa estabilidad, y bien sabido es que si se puede por el Poder Legislativo garantizar lo más, cual es la estabilidad en el empleo, bien se puede garantizar lo menos. Esto último estaría dado por el hecho de obligar al patrón a una indemnización superior en caso de un despido como consecuencia del ejercicio del derecho de huelga.

En la Convención Constituyente de 1957 se plantearon estos problemas y una fuerte corriente doctrinaria aconsejaba que también en el empleo comercial se estableciera la protección en cuanto a la garantía de la estabilidad en el empleo. Sin embargo, quedó establecido que corresponde al Poder Legislativo fijar los procedimientos de esa garantía.

Se podría decir infundadamente que hay una desigualdad, porque se pretende la garantía de la estabilidad cuando estamos frente al ejercicio del derecho de huelga y no se la protege de igual manera en los otros casos de despido. Pero, evidentemente, no hay tal desigualdad, porque, como bien lo ha sostenido la jurisprudencia del alto tribunal argentino, el principio de igualdad juega cuando se trata de idéntica manera a los que se encuentran en idénticas condiciones. Y hay razonabilidad en establecer esta categoría de personas que reciben determinada protección, ya que en el ejercicio del derecho de huelga existe la actividad del obrero o del empleado que de una u otra manera podría provocar represalias del patrono.

Por lo tanto, creemos acertada la exigencia de una mayor protección para el obrero o empleado cuando se ejercite el derecho constitucional de huelga, y pedimos a la comisión que arbitre una redacción, cualquiera sea, de manera de brindar esa protección al obrero cuando ejercite ese derecho constitucional.

Bien sabido es que la protección ha de referirse exclusivamente al ejercicio del derecho constitucional de huelga, siempre que se observen las reglamentaciones que el poder público

puede establecer al respecto, pues el ejercicio del derecho de huelga como el de los demás derechos constitucionales está sujeto a la reglamentación de las leyes pertinentes. Todo ello siempre que la huelga sea legítima, porque cuando ella es ilegítima ya no sólo no se ejercita un derecho, sino que se incurre en la violación del mismo derecho que la Constitución consagra.

En consecuencia, solicito a la comisión que arbitre alguna redacción que proteja más al empleado u obrero cuando ejercite el derecho de huelga.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Rodolfo José Tecera del Franco.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: como se ha reconocido en el debate realizado ayer sobre este artículo, el despacho de la comisión avanza notablemente sobre la legislación vigente. Algún legislador calificó ese avance de revolucionario, pero consideramos que las normas protectoras deben guardar relación y contemplar la realidad económico-social, pues de lo contrario, si se destruye ese equilibrio, terminan por revertir en contra de los propios trabajadores.

Por otra parte, no nos parece prudente la distinción entre huelgas legales e ilegales. En estas disposiciones no estamos reglamentando el derecho de huelga, sino estableciendo cuáles serán los efectos de la huelga respecto de la relación individual del contrato de trabajo.

Por estas consideraciones y por las expuestas en la reunión de anoche, la comisión va a mantener su despacho y no va a aceptar los agregados propuestos.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Natiello.

Sr. Natiello. — Este asunto va había sido superado ayer. Estamos en la instancia inmediata a la votación. No conozco bien el reglamento al respecto, pero es evidente que si estamos por votar una cosa no podemos reabrir el debate.

Por lo demás, la cuestión ya había sido explicada con toda claridad por el señor diputado Pena, y es evidente que no se puede confundir el contrato de trabajo, sobre el que estamos legislando, con el contrato administrativo, que es una cosa muy diferente.

Por lo tanto, solicito que volvamos a la situación de ayer, en que se iba a votar el artículo 36.

Sr. Vázquez Pol. — Ya estaba cerrado el debate.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — No se votó el cierre del debate en la reunión anterior, cuando se pasó a cuarto intermedio. Los legisladores que no habían hecho uso de la palabra tienen por lo tanto el derecho de anotarse y hacer uso de ella ahora.

Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Sencillamente para ubicar el problema donde lo dejamos anoche.

Solicito a la Presidencia que por Secretaría haga leer el artículo, tal como quedó redactado por la comisión, con el agregado propuesto por el señor diputado Horacio García y aceptado por el señor diputado Serú García.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Se va a leer por Secretaría la redacción del artículo.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo quedaría redactado en la siguiente forma: «La huelga suspende el contrato de trabajo. El empleador, aun mediando declaración administrativa de ilegalidad, no podrá despedir a los trabajadores por adherir a una huelga si ésta fue decretada por una asociación profesional reconocida.» El agregado sería el siguiente: «Si lo hiciere, el despido será considerado como sin causa y el empleador estará obligado a indemnizar con el décuplo del monto previsto en el artículo 38, inciso 3º, apartado C).»

Sr. D'Angelo. — Que se vote por partes.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — La Presidencia demanda del miembro informante de la comisión aclare si este agregado del diputado Serú García ha sido aceptado por la comisión.

Sr. Pena. — No ha sido aceptado.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Antes de que se vote deseo pedir a la comisión que aclare si la interpretación que el miembro informante asigna a la palabra «huelga», en cuanto se ha referido que es un término genérico, comprende además al paro y al trabajo a desgano como formas de la huelga.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — El concepto de huelga es genérico y tiene el alcance previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Por las razones dadas por el miembro de este sector que integra la comisión, nuestro bloque va a votar por la negativa y deja constancia de que tiene su propio despacho.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado García.

Sr. García. — Simplemente para dejar aclarado que el agregado proyectado ha sido propuesto por el diputado que habla con adhesión del señor diputado Serú García, y no como erróneamente, a nuestro juicio, lo enunció la Presidencia.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Se dejará constancia, señor diputado.

En primer lugar se va a votar el artículo 36 tal como ha sido propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa de 84 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado García, que ha sido apoyado por el señor diputado Serú García.

—Resulta negativa de 55 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Garófalo. — Debe votarse también el agregado que propuse al artículo.

Sr. Pizarro. — Que se informe en qué consiste el agregado.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — ¿El agregado se refiere al artículo 37?

Sr. Garófalo. — No, señor presidente; se refiere al artículo 36.

Dice así: «...salvo el caso específico que lo fuera por motivos políticos.»

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Garófalo.

—Resulta negativa de 71 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — En consideración el artículo 37.

Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Señor presidente: voy a proponer una modificación al artículo 37 en la última parte del segundo párrafo, desde que en ese sector del texto no es clara su redacción. Propongo suplantarla por la que a continuación voy a enunciar: «Si en razón del cambio de titular se extinguiere el contrato de trabajo, tanto el primitivo titular como el nuevo quedarán solidariamente obligados por las consecuencias de la extinción y el trabajador podrá accionar contra ambos, conjunta o separadamente, en procura del cobro de sus créditos.»

A poco que se examine el texto original del proyecto sometido a consideración, se verán los vicios de redacción que padece, cuando dice: «...por las consecuencias de la extinción y el trabajador podrá accionar por sus créditos contra cualquiera de ellos o ambos». Es una redacción por demás viciosa, oscura e inapropiada para un texto legal. De allí que reitere el pedido que formulé en el sentido de que se substituya por la redacción enunciada precedentemente.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez Vagaría.

Sr. Rodríguez Vagaría. — Es indudable que a través del artículo 37 la comisión ha pretendido preservar al trabajador de cualquier fraude que pudiera cometerse con la transmisión del fondo de comercio a una nueva firma. Sin embargo, entiendo que en la forma como está redactada, sobre todo la primera parte del artículo, dicha preservación no podrá ocurrir, porque en una forma muy natural dice el artículo que «...pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo».

Esto es lo natural. La ley no tendría necesidad de decirlo, sobre todo cuando los empleados han aceptado también la transferencia del fondo de comercio; pero ocurre que muchas veces de un principal solvente, el fondo de comercio pasa a un nuevo adquirente que no tiene solvencia. A veces llega a ser así un fraude concertado, y de acuerdo con esta redacción el transmisor del fondo de comercio escapa completamente a toda responsabilidad. Yo creo que esa responsabilidad hay que consignarla en la ley y para ello propongo el agregado, después de la última palabra del párrafo citado, o sea del vocablo «trabajo», de la siguiente frase: «manteniéndolas en forma solidaria con el primitivo titular durante el término de tres años». Pongo un término porque no es suficiente el de la prescripción general, que para esta clase de circunstancias emergentes de la ruptura del contrato de trabajo instituye este mismo proyecto ya que tampoco es justificado dejar al cedente del fondo de comercio, que generalmente ha procedido con buena fe, librado a las circunstancias del tiempo ilimitado. Un plazo debe tener también esta garantía solidaria con que se hace cargar por la ley al empleador transmisor del establecimiento.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: el artículo 37 tiene, en mi concepto, algunas lagunas y, además, observo falta de coherencia entre su texto y el de otras disposiciones que ya ha aprobado esta Cámara.

Implica, en primer lugar, una reforma de la ley 11.687, de transferencia de fondo de comercio. Las incoherencias a que me he referido se manifiestan, principalmente, en el primer párrafo del artículo. Con el fin de aclarar la ley y de evitar futuros conflictos, propongo el siguiente texto para el primer párrafo del artículo 37: «En caso de cambio del titular del establecimiento o empresa, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, salvo que no continúe con la misma actividad o cambie su estado jurídico.»

Por otra parte, para que las obligaciones nacidas del contrato anterior pasen al nuevo adquirente, debe exigirse que se hayan cumplido las disposiciones de la ley de compraventa de fondo de comercio. Por eso es que propongo, como nuevo párrafo, a continuación del anterior, el siguiente: «Las obligaciones nacidas del contrato anterior, aún no cumplidas, no pasan al nuevo dueño, quien sólo será responsable de esas obligaciones si se hubiese observado el procedimiento de la ley 11.687. En el supuesto caso de que se cambiare la actividad o el estado jurídico, el trabajador tendrá derecho a considerar rescindido el contrato y a reclamar las indemnizaciones previstas en esta ley.»

De esta manera, el artículo en consideración concordaría con el número 10, que ya hemos aprobado.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión considera que los agregados propuestos no mejoran la redacción del artículo en debate y que no se presentan las incongruencias señaladas por los legisladores preopinantes. Por esas razones, mantiene el texto de la disposición y no acepta las observaciones formuladas.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Se va a votar el artículo 37 tal cual fue despachado por la comisión.

— Resulta afirmativa de 84 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — El señor diputado Risso propone una substitución de texto, que se leerá por Secretaría.

Sr. Secretario (Oliver). — El señor diputado Risso propone substituir la parte final del segundo párrafo por la siguiente: «... y el trabajador podrá accionar contra ambos, conjunta o separadamente, en procura del cobro de sus créditos.»

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Se va a votar la substitución de texto propuesta por el señor diputado Risso. Se necesitan dos tercios de votos.

— Resulta negativa de 56 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Por Secretaría se va a leer el agregado propuesto por el señor diputado Rodríguez Vagaría.

Sr. Secretario (Oliver). — El señor diputado Rodríguez Vagaría propone agregar después de las palabras «del contrato de trabajo» las siguientes: «manteniéndolas en forma solidaria con el primitivo titular durante el término de tres años.»

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Se va a votar el agregado que acaba de leerse por Secretaría.

— Resulta negativa de 70 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Corresponde considerar la variante propuesta por el señor diputado Fernández, a quien la Presidencia ruega dé lectura.

Sr. Fernández. — Propongo agregar, a continuación del primer párrafo, la siguiente redacción: «Las obligaciones nacidas del contrato anterior aún no cumplidas no pasan al nuevo dueño, quien sólo será responsable de esas obligaciones si se hubiese observado el procedimiento de la ley 11.667.»

Además propongo incluir un párrafo final que diría así: «En el supuesto caso de que cambiare la actividad o el estado jurídico, el trabajador tendrá derecho para considerar rescindido el contrato y a reclamar las indemnizaciones previstas en esta ley.»

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Se va a votar los agregados propuestos por el señor diputado Fernández.

— Resulta negativa de 73 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — En consideración el artículo 38.

Tiene la palabra el señor diputado Selser.

Sr. Selser. — Deseo proponer, a continuación del capítulo 4º, un nuevo capítulo relativo a la estabilidad en el empleo.

El señor miembro informante, al hacer el informe en general del proyecto, nos habló acerca de que necesitábamos una ley de estabilidad. Rechazaba el mal empleo del concepto «ley de despido» para la que lleva el número 11.729. Así es, señor presidente; el espíritu que informó a los creadores de la ley 11.729 y a quienes redactaron este despacho fue crear una ley de estabilidad, no reglamentar los despidos. Consideramos indispensable, en este momento de la discusión, introducir un nuevo capítulo que hable concretamente de una estabilidad completa para los trabajadores. Proponemos, entonces, la introducción de un capítulo cuyo primer artículo, que someto a consideración de la Cámara, dice así: «Todo empleado u obrero que hubiere alcanzado la antigüedad mínima de diez años desde su ingreso a la empresa, gozará de los beneficios de la estabilidad, siempre que no estuviera en condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria íntegra y conforme a las prescripciones de la presente ley.»

No quiero leer ahora el resto del articulado porque, por supuesto, la inclusión de este capítulo depende del resultado de la votación sobre el texto que he leído, pero sí quiero argumentar algo acerca de esta proposición. Todos los diputados presentes estarán de acuerdo en que ésta es una ley que debe tener por objetivo esencial la estabilidad de los trabajadores por diversas razones.

En primer lugar, por su necesidad social, puesto que la estabilidad de los trabajadores está relacionada con los derechos más elementales del hombre; en segundo término, por la defensa de la familia puesto que la estabilidad en el empleo es lo único que permite la constitución orgánica y la adaptación del hombre joven a los objetivos nobles de la defensa de su familia. Por otra parte, los señores diputados al rechazar una proposición de nuestro bloque con respecto a vacaciones compensadas me han dado también otro argumento que consiste, simple-

mente, en esto: nuestra idea de las vacaciones compensadas, apoyada por el sector justicialista, la bancada demócrata cristiana, y otros diputados, como el señor Fernández, se basaba, sobre todo, en la necesidad de dar al trabajador un descanso adecuado a su edad y al sacrificio que había venido aportando a la sociedad, como un todo, y no simplemente referido a la antigüedad que tuviera en el trabajo.

Este capítulo, cuya inclusión proponemos en el proyecto que se discute, llevaría la posibilidad de concretar esta aspiración porque daría al empleado la estabilidad completa. Nosotros, al plantear este problema de la estabilidad, estamos tomando en cuenta el espíritu que creamos informa a todos los señores legisladores respecto al deseo de que ésta no sea una ley que reglamente los despidos sino que asegure la estabilidad del contrato de trabajo.

El doctor Alfredo L. Palacios, autor de *El nuevo derecho*, cuando se sancionó la ley 11.729 la saludó como una restricción de la libertad de contratación. Supongo que la libertad de contratación será el argumento esencial que se planteará contra nuestra proposición, pero no creo —y por eso cito al maestro de todos nosotros al doctor Alfredo L. Palacios— que ése sea un argumento a traer en estas condiciones. Ya pocos lo esgrimen, aunque, por supuesto, la Unión Industrial Argentina sigue en esa posición. Así hemos visto en una solicitada aparecida en los diarios de esta Capital cómo se nos acusa a los legisladores de todas las bancadas de amenazar con el caos, con la destrucción de la organización social, porque estamos por sancionar una ley que va a posibilitar la estabilidad del contrato de trabajo. Esos argumentos no nos confunden. Creemos que es ineficaz la libertad de contrato en la desigualdad y consideramos que no podemos poner a la cosa más preciosa de nuestra colectividad —al trabajador— a disposición del poder económico del empleador para que éste diga cuándo le sirve, y cuándo no, y resuelva si lo mantiene en su puesto o lo lanza a la calle, donde a veces le resulta casi imposible encontrar otro trabajo en substitución del que tenía anteriormente.

Señores legisladores: estimamos que nuestra proposición contempla una vieja aspiración del proletariado argentino y de todos los hombres que en algún momento de su vida tuvieron que salir a la calle a buscar un trabajo para poder satisfacer sus necesidades y las de su familia. Por otra parte, obra como argumento en defensa de la estabilidad de esta ley el mejor rendimiento del empleado en la medida en que se vea compenetrado y seguro del trabajo que realiza. Más aún, podríamos agregar el argumento de la mecanización y la automatización, que en ciertos casos va obligando a algunos empleados a desistir del concurso de hombres de 35 ó 40 años de edad porque no saben hacer determi-

nados trabajos para reemplazarlos por otros a quienes previamente los instruyen acerca de las tareas que deben desarrollar.

El capítulo sobre estabilidad incluido en el proyecto que discutimos obligará a los patronos a agudizar su inteligencia y a usar métodos modernos de educación con el fin de procurar que esos hombres ya maduros sigan sirviendo a la sociedad desde su puesto de trabajo, con lo que se evitará lanzarlos a la calle y ponerlos en la alternativa de tener que buscar la forma de afrontar la búsqueda de su subsistencia.

Creo que es deseo de todos los legisladores procurar la forma de lograr estabilidad para la ley que vamos a sancionar, para los contratos de trabajo. El proyecto del señor diputado Ocampo, presentado en la Comisión de Legislación del Trabajo, que obra ya en poder de todos los señores diputados, contempla perfectamente el mecanismo por el cual se procurará dar a los trabajadores argentinos la estabilidad que todos los diputados desean.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — La Presidencia consulta al señor diputado Selser si el texto del capítulo V que ha proyectado es el mismo que se encuentra en poder de la Presidencia y en las bancas de los señores legisladores.

Sr. Selser. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — No tenía pensado, señor presidente, referirme a la proposición del señor diputado Selser, pero me adelanto a expresar que la vamos a votar afirmativamente porque coincidimos plenamente con los fundamentos dados sobre esta cuestión que motivó de parte del bloque de la democracia cristiana una iniciativa similar el año pasado.

Quiero referirme ahora al párrafo a) del apartado 2º del artículo 38, sobre las causales de la extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — La Presidencia señala al señor diputado que oportunamente el artículo 38 será considerado párrafo por párrafo. Si el señor diputado lo considera conveniente podría postergar sus reflexiones para esa oportunidad.

Sr. Vedia. — De acuerdo, señor presidente.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Garófalo.

Sr. Garófalo. — La había pedido para proponer lo que acaba de expresar el señor presidente, es decir, que se ponga a votación párrafo por párrafo. De esa manera, los señores diputados podrán hacer las observaciones pertinentes en cada caso y no indiscriminadamente, como se está haciendo ahora.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Si hubiere asentimiento, así se hará, señor diputado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Natiello.

Sr. Natiello. — Señor presidente: me voy a referir al proyecto presentado por el compañero diputado Selser.

El artículo 14 de la Constitución Nacional establece el derecho de usar y disponer de la propiedad; y el artículo 17 expresa que la propiedad es inviolable. Pero es curioso que el concepto de propiedad se venga refiriendo a un límite rigurosamente estricto, como si se tratase solamente de la propiedad fundiaria, de la propiedad de la tierra o, a lo más, de la propiedad de vacas. Tierras y vacas. Ese parecería ser el concepto clásico en esta cuestión.

El derecho de propiedad no significa otra cosa que el contenido que corresponde a cualquier derecho subjetivo. Todo derecho subjetivo importa, en el fondo, un derecho de propiedad, y hay un derecho del trabajador a la estabilidad en el empleo, que la doctrina francesa llama derecho de propiedad del empleo. Es indudable que de la misma manera como los constitucionalistas protegen tan celosamente el derecho de propiedad cuando se refiere a latifundios o a vacas, con el mismo criterio deberían defender el derecho de propiedad del empleo que corresponde al trabajador.

Por estas breves consideraciones, la bancada justicialista va a apoyar el proyecto del compañero diputado Selser.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: en nombre de la mayoría de la comisión, me voy a oponer a la incorporación al proyecto que se está considerando, de este capítulo de observaciones que han sido formuladas por el señor diputado Ocampo fuera del término reglamentario y que, por lo tanto, requiere la mayoría que establece el reglamento.

Sr. Ocampo. — Lo he hecho saber a la comisión y he firmado el despacho en disidencia, acompañando mis observaciones. Todo eso lo he hecho dentro del término reglamentario.

Sr. Pena. — Es exacto que el señor diputado Ocampo expuso esta inquietud en la comisión, pero también es cierto que la mayoría de la comisión no hizo lugar a su inquietud. También lo es que la disidencia del señor diputado Ocampo ha sido presentada fuera del término reglamentario. Pero voy a contestar la cuestión de fondo, que me parece mucho más importante que ese aspecto formal.

Es exacto que lo que se pretende es la estabilidad de la relación laboral. No es tampoco la libertad de contratación lo que nos preocupa y lo que funda nuestra oposición. Por el contrario, consideramos que esta pretendida estabilidad que se lograría, según la propuesta del sector del socialismo argentino, conforme el capítulo V de su disidencia, sería en realidad contraria a los auténticos intereses del trabajador.

Para demostrarlo repasemos el texto de las modificaciones que se proponen. Se dice que todo empleado u obrero que hubiere alcanzado la antigüedad mínima de diez años desde su ingreso en la empresa gozará de los beneficios de la estabilidad. Esos beneficios se establecen en otro de los artículos de este capítulo V de las modificaciones: todo trabajador que fuere dejado cesante por causas no enumeradas como permisibles, podrá reclamar su reincorporación, y denegada ésta por el patrono, gozará del ingreso mensual a que tuviere derecho conforme a su categoría y de los beneficios sociales, con los incrementos salariales pertinentes, hasta tanto se encontrare en condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria.

La consecuencia de esta norma sería que ningún trabajador alcanzaría la antigüedad mínima porque el empleador, ante la posibilidad de tener que sufrir aquella carga en el supuesto de decidir la rescisión del contrato, lo despediría antes del término de diez años. Ello, con los siguientes inconvenientes: perjuicio para el trabajador, que ni siquiera tendrá en la relación laboral la estabilidad que tiene actualmente; perjuicio para el empresario que no podrá contar con el personal adecuado para una mejor producción, y perjuicio para la economía nacional porque se desperdiciaría capacidad útil de los trabajadores.

Creemos que la iniciativa es plausible como idea general, pero errónea en su forma de instrumentación y por eso nos oponemos a que se incorpore en la ley.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Selser.

Sr. Selser. — Los argumentos del señor diputado Pena sobre las posibles actitudes de la patronal en el caso que se apruebe el capítulo que proponemos son reales. Pero fíjense los señores diputados que se refieren a lo que es la chicana habitual en el sector del capital. Tanto es así, que mientras estamos discutiendo esta ley en muchos sitios se está echando a empleados, como medio de asegurarse el no cumplimiento de una indemnización por despido más alta que la que rige actualmente. Evidentemente, frente a cada ley que esta Cámara sancione, y frente a cada disposición del gobierno protegiendo a los trabajadores, el sector patronal se exprimirá la cabeza para encontrar el modo de evadir el cumplimiento leal y legal de las normas.

Pero en este caso proponemos incluso artículos accesorios que permitirán la efectiva protección de los trabajadores, por ejemplo, estableciendo que un año antes de cumplirse el plazo mínimo ellos no podrán ser despedidos sin causas adecuadas. Estos son recursos que inclusive tendremos que utilizar para proteger a los trabajadores de las actitudes patronales con referencia a los demás artículos de esta ley.

En cuanto a la conveniencia o no de esta ley

para la economía nacional, creo que podríamos discutir el problema en otro tono si en la Argentina existieran en este momento organismos adecuados, es decir, una bolsa de trabajo que permitiera la correcta movilidad de los trabajadores entre las empresas, y si existieran los organismos educacionales que hicieran posible, por ejemplo, a un hombre de cuarenta años, técnico en una rama, abandonarla y ser debidamente entrenado para ser técnico en otra, con la misma categoría y salario. El problema no sería entonces de tanta urgencia, pero los señores legisladores saben que eso no es lo que ocurre ahora en nuestro país. Nosotros legislamos para este momento y para este país, donde sabemos que la gente aprieta timbres y corre de un lado a otro buscando trabajo.

Sabemos que serían mejores otros sistemas, incluso el del seguro social, que ampararía a los trabajadores desocupados. Pero el mecanismo protector no existe y lo mismo ocurre con el mecanismo que permita la utilización económica de los trabajadores en el lugar más adecuado. Incluso esta mañana un funcionario del Ministerio de Trabajo nos hacía conocer en la Comisión de Previsión Social en desesperación ante el hecho de que en la Argentina no existen los organismos educacionales aptos para encarar el traslado de un trabajador de una industria a otra, o de un empleo a otro.

Por todo ello, no me convencen los argumentos del miembro informante de la comisión, y la bancada socialista, por lo tanto, ha de insistir en que se incluya este capítulo en el articulado en discusión.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo para una segunda intervención.

Sr. Ocampo. — Es la primera intervención, señor presidente, pero igualmente he de ser muy breve.

Cuando informé en general las disidencias parciales, di los argumentos en virtud de los cuales nosotros, los socialistas argentinos, que nos creemos defensores de la clase trabajadora, insistimos en este capítulo de la estabilidad. Nada es más importante para el trabajador que tener la seguridad de conservar su empleo, y creo que este hecho de la estabilidad le interesa mucho más al trabajador que las mejoras circunstanciales de su salario. Y esto, porque cuando el trabajador llega a cierta edad, que ya ha constituido su familia, necesita, por lo tanto, contar con los recursos necesarios que le permitan mantener su hogar y atender a los gastos de la educación de sus hijos. Sin embargo, desgraciadamente, en la actualidad cuando el trabajador llega a una cierta edad la parte patronal busca argumentos fútiles para poder despedirlo, dejándolo en el desamparo a una edad en que le será difícil conseguir un nuevo empleo.

Por todas estas manifestaciones, y por lo que expresé en el momento que plantee estas disidencias, que lealmente hice presentes a los miembros de la comisión, formuladas antes de firmar el despacho, permitiendo así que existiera un despacho único, tomé los recaudos necesarios para que fueran repartidas entre todos los señores diputados; nosotros, pues, vamos a insistir en nuestra posición. Además, consideramos que es necesario saber cuál es la posición de los señores diputados, y por ello solicito la votación nominal para el momento oportuno.

Sr. Presidente (Tecerá del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Señor presidente: nuestro bloque va a apoyar la iniciativa del socialismo argentino, pero ya en la discusión en general señalé que se requiere una serie de condiciones para que la actividad de los trabajadores sea eficiente.

Pienso que esta ley es para los tiempos de estancamiento, para tiempos difíciles como los presentes. Si hubiese una economía en constante expansión que determinara un ritmo dinámico en las actividades de la Nación, creo que no tendríamos que recurrir a este tipo de disposiciones legales tendientes a asegurar la tranquilidad y la estabilidad de los trabajadores.

Una economía en constante expansión trae como consecuencia una mayor movilidad social, y esta circunstancia ofrece mayores perspectivas, mejores horizontes, para los hombres de trabajo. Desaparece así, en buena medida, la preocupación del trabajador por mantenerse constantemente en el lugar donde desarrolla su actividad. El problema de la seguridad, el problema de la estabilidad en su puesto, en su lugar de trabajo, es algo relativo cuando hay nuevas perspectivas para el hombre de trabajo.

El bloque del radicalismo intransigente va a votar favorablemente la propuesta que se ha realizado, por tratarse de un proyecto que, en definitiva, establece cuáles son las causas por las cuales justificadamente puede ser despedido un trabajador y porque consagra la estabilidad teniendo en cuenta, como lo señalara precedentemente, los tiempos difíciles en que se desenvuelve la actividad del hombre de trabajo.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Fabrizio.

Sr. Fabrizio. — He pedido la palabra, señor presidente, para adelantar que nuestro voto va a ser por la afirmativa, pero también deseo señalar que ese voto no significa estar de acuerdo con la mecánica que impone el proyecto de ley. Apoyamos la idea, pero entendemos que debe ser estructurada de manera tal que permita una mayor agilidad y asegure el propósito que anima al proyecto.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Díaz.

Sr. Díaz. — Nuestro sector va a apoyar la proposición del señor diputado Ocampo. Efectivamente, como él lo ha señalado, oportunamente formuló una serie de observaciones al proyecto que consideramos, entre ellas una relacionada con el artículo que estamos tratando.

Durante la discusión en general nosotros hemos fijado claramente la posición del bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo en relación a esta cuestión, y a través del curso del debate los señores diputados van ubicándose en la posición que habíamos sostenido y que se concreta en esto.

Una ley de esta naturaleza, que tiende a contemplar los distintos aspectos de la relación obrero-patronal, tiene vigencia real y efectiva cuando existe base de sustentación económica. No podemos abrigar muchas esperanzas con esta ley cuando la situación imperante en el país nos está señalando que se deben rectificar rumbos. De cualquier manera entendemos que con esta ley en alguna medida vamos a tutelar el derecho de los trabajadores; pero lo real es que la estabilidad del empleado descansa sobre una serie de factores concurrentes, uno de los cuales es que la parte patronal también goce de estabilidad económica, porque de lo contrario todo esto es utópico.

Ante el grito de alarma que provino del sector empresario, que afirmaba que esta ley va a tener como consecuencia la instauración en el país de la industria del despido, nosotros dijimos que tal presupuesto no está dado, por cuanto al trabajador le interesa principalmente el mantenimiento de su puesto.

De modo que a lo que debemos propender es a la creación de nuevas fuentes de trabajo, y para ello es necesario rectificar la política sustentada por el Poder Ejecutivo.

Durante la discusión en general habíamos señalado cuál era nuestra posición y en qué aspectos disentíamos; pero lo real es que debemos tratar de lograr nuevas fuentes de trabajo: en consecuencia vamos a votar afirmativamente la proposición del señor diputado Ocampo.

Sr. Garófalo. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Garófalo.

Sr. Garófalo. — Si se admite la inclusión del artículo que propone el señor diputado Ocampo, que no ha sido estudiado por los señores diputados, se desnaturaliza completamente el fondo de esta ley. Hay una cantidad de artículos que hablan de la indemnización por despido a cargo del empleador. Si se acepta la estabilidad, quiere decir que no puede haber despido. Es una confusión y yo considero que el despacho debe volver a comisión, si se pretende insistir en la inclusión de este nuevo capítulo, para que se haga una nueva redacción de toda la ley. No es posible que un artículo admita el despido y que por otro artículo no se pueda hacerlo.

Por tales razones formulo moción de que el despacho vuelva a comisión.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Se llamará para votar.

Sr. Vedia. — Como son muchos los señores diputados que se encuentran ausentes del recinto, pido que se pase lista.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Hay 127 señores diputados en la casa y 84 en el recinto. ¿Insiste en su propuesta el señor diputado Vedia?

Sr. Vedia. — Sí, señor presidente. Además, ruego a la Presidencia exhorte, como lo hizo ayer, a los bloques en el sentido de que sus integrantes permanezcan en el recinto para poder sancionar rápidamente esta ley.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Se tomarán providencias en tal sentido, señor diputado.

Se va a pasar lista.

—Mientras se pasa lista:

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — En este instante hay número en el recinto.

Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado Garófalo de que el orden del día 211 vuelva a comisión.

—Resulta negativa de 83 votos; votan 106 señores diputados.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: voy a expresar muy brevemente mi pensamiento respecto de este importantísimo artículo que estamos discutiendo. Yo creo que en el país hay una sola ley de estabilidad efectiva: la 12.637, que ampara a los empleados bancarios y que fue sancionada en 1940 y reglamentada por el decreto 89.624/41. Hay otras leyes que también establecen la estabilidad, pero en una forma frágil —diría—, tal como la 12.713, de trabajo a domicilio; la 12.891, la 12.383 sobre despido por causa de matrimonio, etcétera; pero insisto en que la única que asegura la estabilidad efectiva es la ley de los empleados bancarios y del seguro.

Yo creo que, como han dicho algunos señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra, a los trabajadores les interesa mucho más mantener su fuente de trabajo que cobrar indemnizaciones, por suculentas que éstas sean. Por eso estoy de acuerdo con la propuesta hecha por el señor diputado Ocampo en nombre de la bancada del socialismo argentino, y la apoyo a título personal. Creo que si los empleados de un banco tienen estabilidad después de seis meses de haber trabajado en la institución, también deben tenerla todos los restantes trabajadores argentinos.

Por todo ello es que propongo que se incluya un inciso en el artículo 38 que diga lo siguiente: «Estabilidad: el trabajador tendrá derecho a la

estabilidad desde el momento en que hubiere cumplido un período de prestación de servicio de cinco años —creo que el señor diputado Ocampo ha propuesto diez—, contados desde la fecha de su ingreso a la empresa respectiva, siempre y cuando no mediere la culpa del trabajador prevista en el inciso 3º del presente artículo. La obligación del empleador de mantener en su puesto al trabajador caduca cuando éste estuviere en condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria en la caja respectiva.»

De este modo, las indemnizaciones por despido sin causa justificada se aplicarían en los casos de trabajadores que no hubieran cumplido los cinco años de servicio, deducido el período del artículo 36. En esos casos y hasta ese plazo entrarían a jugar las indemnizaciones previstas en el despacho.

Para terminar, insisto en que lo que quieren los trabajadores es conservar su fuente de trabajo. No aumentemos tanto las indemnizaciones, pero demosles estabilidad efectiva.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: quiero llamar a reflexión serena a los señores legisladores que están proponiendo reformas de fundamental importancia. Es verdad que la naturaleza del derecho laboral obliga al legislador a reglamentar las relaciones contractuales del trabajo a fin de asegurar al trabajador su vida, su salud y la posibilidad de hacer frente a sus cargas de familia. Pero el legislador también está obligado a preocuparse por los intereses de la comunidad, y esto debe hacerse con equilibrio. De lo contrario, en un afán de exagerar la protección del trabajador, en definitiva le traeremos un perjuicio.

Yo he señalado con anterioridad que la idea es plausible; pero éste no es el instrumento ni la vía por la cual pueda obtenerse la estabilidad. Seguramente, con una legislación de seguridad social ordenada y meditada podrá obtenerse la ansiada estabilidad de las relaciones laborales. La mayoría de la comisión no se opone a esta idea, pero sí se opone a la forma en que está instrumentada. Tampoco funda su oposición en la libertad de contratación. Este proyecto tiene por finalidad esencial obtener la estabilidad de las relaciones laborales, pero la mecánica adoptada por el proyecto de la representación del socialismo argentino no va a lograr el fin perseguido. Por el contrario perjudicará, en definitiva, a los trabajadores argentinos.

Advirtamos que, según el proyecto aludido, se necesitaría tener una antigüedad mínima de diez años para beneficiarse con el derecho a esta suerte de estabilidad. En consecuencia, cuando el trabajador llegue a los nueve años de antigüedad, tendrá pendiente sobre su cabeza la rescisión del contrato de trabajo, pues cabe la po-

sibilidad de que el empleador no quiera cargar con la responsabilidad del pago de tamaño indemnización. ¿Qué va a suceder entonces? Que ni el trabajador logrará la ansiada estabilidad de la relación laboral, ni el empresario tendrá el personal idóneo para el manejo de su empresa, ni se conseguirá un aumento de la productividad que en definitiva revierta en beneficio de toda la comunidad.

Repito que, a nuestro juicio, la idea es plausible. Pero consideramos que por esta vía lo que se logrará es que los trabajadores no obtengan la estabilidad, que se perturbe la productividad y que se perjudique la economía del país.

Llamo a la reflexión a los señores diputados en el sentido de que no exageremos en la sanción de normas protectoras, sin medir con serenidad y responsabilidad sus consecuencias. Si estamos tratando de proteger los derechos legítimos del trabajador a la estabilidad de la relación laboral, no lo perturbemos en un afán que no quiero calificar, pero que en definitiva le ocasionará un perjuicio. Nada más.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Pena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Desearía que la Presidencia me informara, teniendo en cuenta que esta disidencia parcial no fue presentada en términos reglamentarios, cuál es el número de votos que necesita para ser aprobada.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Según interpretación reglamentaria de la Presidencia, requiere simple mayoría por haberse presentado por un diputado que es miembro de la comisión y que ha formalizado una disidencia parcial.

Sr. Pena. — No hay disidencia parcial si no se presenta en término.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Se trata de un artículo nuevo a introducirse en este proyecto. De acuerdo con lo realizado por la Cámara hasta este momento, cuando se ha votado la inclusión de un artículo nuevo, ha sido por simple mayoría.

Sr. Vedia. — Así es, señor diputado.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Por Secretaría se van a leer los párrafos pertinentes del artículo 95.

Sr. Secretario (Oliver). — Son los siguientes: «La Cámara no considerará ninguna propuesta de modificación que no haya sido depositada en la Secretaría dentro de este término, salvo su aceptación por la comisión respectiva antes de la consideración del despacho por la Cámara o pronunciamiento expreso de la misma por los dos tercios de los votos emitidos, debiendo su

autor, en este caso, limitarse a leerla y procediéndose, sin debate, a determinar si ella se considera o no por la Cámara.

»Los dictámenes de comisión en discrepancia con el que fuere aprobado en general y las disidencias parciales tendrán, en el debate en particular, el tratamiento de las observaciones formuladas en término, y los diputados que las sostengan podrán, en el curso del mismo, hacer las propuestas pertinentes.»

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — De acuerdo con la última parte del artículo 95, señor diputado Pena, pareciera corresponder reglamentariamente la simple mayoría.

Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Quiero aclarar que aquí no hay disidencia parcial presentada en término, ni tampoco dictámenes en discrepancia, porque lo que se ha distribuido a los legisladores es la opinión mimeografiada del sector socialista argentino; pero si no ha sido impresa por la Cámara, significa que no se presentó en término, y el propio autor lo ha confesado.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — La Presidencia desearía saber, señor diputado Ocampo, si la disidencia que ha sido mimeografiada por el sector a que pertenece y que lleva por título «Disidencia parcial», ha sido presentada en término.

Sr. Ocampo. — Todos los miembros de la comisión que firmamos el despacho hemos hecho observaciones parciales y nos reservamos para presentarlas en el momento oportuno. La Cámara, durante el tratamiento de este proyecto de ley, ha aceptado un sinnúmero de disidencias parciales, presentadas en el recinto, que en todos los casos ha requerido simple mayoría, sin que el señor presidente de la comisión observara ese procedimiento.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Quiero aclarar nuevamente que la comisión ha recibido tan sólo dos disidencias parciales, formuladas una por los señores diputados Romano y Niembro y la otra por el señor diputado González Bergez.

Las disidencias elaboradas por el socialismo argentino no han sido presentadas en término, y la prueba está en que la Secretaría no ha ordenado su impresión, como corresponde reglamentariamente.

Sr. Presidente (Tercera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Díaz.

Sr. Díaz. — Con el criterio del señor diputado Pena, tampoco la observación que ha formulado el diputado que habla tendría vigencia.

Soy autor de una disidencia que de inmediato puse en conocimiento de la comisión. No sé en qué oportunidad se resolvió rechazarla. Tanto es así que cuando reiteré mi posición respecto al artículo que establece el efecto retroactivo de la ley se me dijo que la instancia para presentar

la disidencia era en el debate en particular. En esa inteligencia no hice ninguna otra gestión ante la comisión de la que soy miembro.

Tenía entendido, señor presidente, que me reservaba el derecho de proponer el artículo en substitución durante el curso del debate en particular, que es lo que ha hecho ahora el señor diputado Ocampo.

Repito que con el criterio del señor presidente de la comisión, mi proposición no tendría asidero de tipo reglamentario, pero reitero que la voy a presentar en su oportunidad.

Sr. Ocampo. — Pido la palabra para una aclaración personal.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Llamo a la reflexión, y apelando a la proverbial caballerosidad del señor diputado Pena le requiero manifieste si en el momento de firmarse el despacho no le hice presente personalmente y en presencia de toda la comisión que formularía disidencias parciales. Quedó como que en esa oportunidad se convino que esas disidencias parciales adelantadas en la comisión se plantearían en el curso del debate, las que podrían o no ser aceptadas. Es por eso que nuestro bloque las trae en este momento y es la Cámara la que debe resolver su aceptación o rechazo.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — La Presidencia ruega al señor diputado Pena le haga saber si la mayoría de la comisión considera la disidencia del señor diputado Ocampo, que consta en el orden del día 211 pero sin transcripción, como una disidencia parcial en tiempo, porque de eso depende la interpretación reglamentaria que tendremos que hacer.

Sr. Pena. — Señor presidente: en primer término voy a contestar al señor diputado Ocampo.

Es exacto lo que él dijo. En la comisión formuló una iniciativa que no es ésta, sino otra en términos parecidos, porque tiene un proyecto de ley sobre el particular. La comisión no la aceptó; la prueba está en que en el texto ordenado no figuran esas disposiciones. El señor diputado Ocampo tenía entonces el plazo reglamentario para formular la disidencia en los términos que prevé el mismo reglamento. No la formuló; en consecuencia, la comisión considera que esta disidencia no está presentada en término reglamentario y, en consecuencia, si no es aceptada por la comisión entiendo que necesita los dos tercios para ser aprobada.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — La Presidencia debe poner a consideración de la Cámara la solución al problema; para ello sugiere un cuarto intermedio de diez minutos a efectos de que, con el asesoramiento de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, pueda hallarse la interpretación reglamentaria más adecuada.

Invito a los señores diputados a pasar a un cuarto intermedio de diez minutos en las bancas.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 18 y 50.

—A la hora 19 y 35:

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado Calvó.

Sr. Calvó. — Señor presidente: la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento ha resuelto no expedirse sobre la cuestión sometida a su consideración debido a que ha considerado necesario disponer de un tiempo mayor para el estudio concienzudo de la interpretación reglamentaria.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Señor presidente: atento a las manifestaciones formuladas por el señor presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que considera que no es prudente expedirse en estos momentos sobre la cuestión reglamentaria a que se ha referido, y dado que nos anima el interés de que esta ley sea sancionada, para que los trabajadores puedan disponer de un instrumento eficiente que les permita defenderse frente a la patronal, y sin que esto importe sentar un precedente —quede esto bien claro— y hasta tanto pueda expedirse la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, me allano en este único caso para que la Cámara decida por los dos tercios de votos, tal como pide la bancada radical.

Pero con el propósito de que el pueblo trabajador sepa quiénes son los que defienden sus intereses y quiénes están con sus explotadores, pido que la votación sea nominal.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Corresponde votar nominalmente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 95 del reglamento, si se considera o no la propuesta del señor diputado Ocampo de inclusión del capítulo V, cuya copia mimeográfica se encuentra en las bancas de los señores diputados y de la que se dará lectura por Secretaría.

Sr. Ocampo. — A fin de aclarar lo que va a votar la Cámara solicito a la Presidencia que someta a votación el capítulo nuevo que hemos propuesto, que iría a continuación del artículo 37 ya sancionado, que se refiere a la estabilidad del trabajador en el empleo después de los diez años de servicios.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — La Presidencia requirió del bloque socialista argentino

si este capítulo V, que se encuentra en la mesa, constituido por ocho artículos, es el que se trata de incluir luego del artículo 37.

Sr. Ocampo. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Por Secretaría se va a dar lectura a los ocho artículos que componen el capítulo V.

Sr. Secretario (Oliver). — El capítulo V, que se refiere a estabilidad, dice así: «Artículo nuevo. — Todo empleado u obrero que hubiere alcanzado la antigüedad mínima de diez años, desde su ingreso a la empresa, gozará de los beneficios de estabilidad, siempre que no estuvieren en condiciones de acogerse a la jubilación ordinaria íntegra y conforme a las prescripciones de la presente ley.

»Artículo nuevo. — Las únicas causas de cesantía de los empleados que hayan alcanzado la antigüedad a que hace referencia el artículo anterior, son las siguientes: a) condena judicial por delitos contra la empresa; b) inhabilitación física o mental, declarada por los organismos previsionales respectivos. En los casos de incapacidad mental, ésta será declarada por la autoridad judicial; c) enfermedad contagiosa crónica, que constituya un peligro para el personal, fehacientemente comprobada por el Ministerio de Salud Pública de la Nación o la repartición provincial correspondiente, con intervención de la entidad sindical a la que el empleado u obrero pertenezca o deba pertenecer; d) inasistencias injustificadas prolongadas o reiteradas del servicio, que respondan a causas totalmente imputables al empleado u obrero. Dichas faltas deberán estar fehacientemente comprobadas mediante documentación del principal aceptada tácita o expresamente por el empleado u obrero. A los efectos de la reiteración se tomarán en cuenta únicamente las inasistencias producidas durante los últimos doce meses; e) desobediencia grave y reiterada a las órdenes o instrucciones que reciba el empleado u obrero en el ejercicio de la función.

»Artículo nuevo. — En los casos en que el empleado u obrero se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria íntegra o por invalidez, podrá ser despedido, haciendo en esos supuestos lo determinado por la ley para el personal con antigüedad menor de diez años.

»Artículo nuevo. — El trabajador que fuere dejado cesante por causa no enumerada en el artículo..., reclamará su reincorporación y ordenada ésta por la autoridad judicial respectiva, en caso de desobediencia del principal, aquél gozará del ingreso mensual a que tuviere derecho, conforme su categoría y beneficios sociales —con los incrementos salariales pertinentes—, hasta tanto se encontrare en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria íntegra.

»Artículo nuevo. — En el supuesto de que el despido se produjera en el lapso de doce meses

anteriores al cumplimiento del plazo de diez años referido en el artículo..., la autoridad judicial respectiva podrá condenar al principal a la reincorporación del trabajador dejado cesante, si por las circunstancias especiales de la causa comprobare que la ruptura se ha debido a la intención de eludir la presente ley.

»Artículo nuevo. — Cuando se produjere un despido en caso del artículo anterior, la condena a reincorporar comporta también el pago de salarios, desde el momento en que el empleado u obrero hubiese cesado de trabajar.

»Artículo nuevo. — El trabajador despedido en el supuesto del artículo..., deberá reclamar ante autoridad competente su reincorporación dentro del término de seis meses a contar desde la recepción de la notificación. En caso de omisión, caduca su derecho a peticionar el reintegro.

»Artículo nuevo. — Los beneficios de la estabilidad se harán extensivos a los trabajadores comprendidos en el presente capítulo que hubieren sido despedidos hasta seis meses antes de la fecha de promulgación de la presente ley.»

Sr. Vázquez Pol. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Vázquez Pol.

Sr. Vázquez Pol. — No sé si he interpretado mal la lectura del señor secretario, pero en el comienzo de este artículo nuevo propuesto por el señor diputado Ocampo, relacionado con la estabilidad del hombre de trabajo, parecería que va a ser posterior a los diez años. Deseo saber, en fin, cuál es el sentido de este artículo nuevo.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — La Presidencia hace notar que ésta no es la instancia para requerir esa aclaración, pues corresponde votar, en primer lugar, si la Cámara se va a ocupar o no de los nuevos artículos propuestos. Si el cuerpo decide considerarlos, será entonces la oportunidad de la aclaración.

Sr. Vázquez Pol. — De acuerdo, señor presidente.

Sr. Presidente (Tecera del Franco). — Como ha resultado suficientemente apoyado el pedido de votación nominal formulado por el señor diputado Ocampo, se va a votar nominalmente si la Honorable Cámara se ocupa de los artículos nuevos propuestos por el señor diputado Ocampo. Sin que sienta precedente, en esta emergencia se tendrá en cuenta el requisito de mayoría de dos tercios.

—Practicada la votación nominal:

Sr. Prosecretario (Pardo). — Han votado 118 señores diputados. Lo han hecho por la negativa 63 y por la afirmativa 55. Los dos tercios son 79 votos. En consecuencia, el pronunciamiento ha sido negativo.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Abduljad, Arana, Armesto, Bianchi, Calvó, Caro, Casas, Castillo, Castro, Coral, Cottonaro, Díaz, Fabrizio, Fernández, Fluixá, Gallo, Garibaldi, Isla, Izetta, Juárez, Mársico, Montani, Monte, Musacchio, Musitani, Natiello, Niemoro, Ocampo, Oreste, Pedrini, Pérez, Pérez Aznar, Pessino, Pizarro, Riera, Rioboo, Risso, Rodríguez, Rodríguez Kessy, Rodríguez Vigil, Romano, Romeu Verdier, Salado, Sarmiento, Selser, Serú García, Simini, Simó, Solana, Tortonese, Uranga, Vázquez, Vedia, Vinti y Viñals.

—Votan por la negativa los señores diputados Abalo, Aguinaga, Aguirre Cámara, Aletta de Sylvas, Alfonsín, Antón, Arias, Arroyo, Avila, Baffico, Balbi, Balestra, Belnicoff, Berrini, Bilbao, Bravo, Cáceres, Cerdeiro, Cortelezzi, D'Angelo, Del Matti, Del Pero, Díaz O'Kelly, Domínguez, Fernández Núñez, Fiol, Garay, Garófalo, González Bergez, Gutiérrez, Hardoy, Harvey, Herrera, Jofré, Lavalle, Mercado, Minsk, Molinas, Muniagurria, Muratori, Ortúzar, Oxenford, Patlis, Pena, Pernasetti, Prat, Puricelli, Rasines, Ratti, Riva, Rodríguez Vagaría, Rouzaut, Sañudo Freyre, Schapira, Spertino, Stainoh, Urteaga, Vaca Lobo, Vázquez Pol, Videla, Villamayor, Zadoff y Zarriello.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara, el señor presidente don Arturo Mor Roig.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 38.

Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Solicito, señor presidente, que este artículo se vote por incisos y dentro de ellos por apartado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si hay asentimiento, así se hará.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En primer lugar, se considerará el punto 1º del artículo 38.

Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Deseo consultar, señor presidente, si se va a votar por partes o si se va a considerar por partes.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia entiende que si se considera por partes, con tanta más razón se votará también por partes.

Si hubiera asentimiento, enunciado el punto, en caso de no haber observaciones, se tendrá por aprobado.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el enunciado y el punto 1º del artículo 38.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el punto 2º, subpunto A).

Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Este apartado, señor presidente, se refiere al caso de renuncia en la extinción del contrato, por voluntad unilateral del trabajador.

Nosotros entendemos que aun con los inconvenientes que puedan suscitarse corresponde la exigencia de que la renuncia debe ser formulada personalmente por el trabajador con vistas a evitar fraudes muchas veces cometidos, una de cuyas formas es la de la renuncia anticipada. Entonces, nosotros deseamos que en este inciso quede establecido que la renuncia se entenderá válida cuando se exteriorice mediante telegrama dirigido al empleador o se formule personalmente por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción.

Vuelvo a señalar que de tal modo, aun con algún inconveniente que pudiera surgir de este procedimiento, quedaría garantida de mejor manera la seguridad del trabajador, se evitarían los fraudes y no se enervarían los buenos propósitos que esta ley persigue, que no son otros que los de amparar al trabajador.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Es para proponer un agregado en el apartado A) del artículo en discusión, a fin de que luego del término «telegrama» se señale debidamente que debe ser «colacionado», en el caso de renuncia a que alude el inciso.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La mayoría de la comisión no acepta las observaciones formuladas por las siguientes razones. En cuanto a la efectuada por el señor diputado Vedia, porque considera que el artículo garantiza suficientemente que la renuncia sea exteriorizada como consecuencia de un acto volitivo del trabajador. En efecto, él es quien debe enviar el telegrama al empleador, y para hacerlo debe exhibir su documento de identidad.

Sr. Vedia. — Yo solicito una aclaración. Evidentemente si la renuncia se hace por telegrama, el problema no se va a suscitar. Pero como el modo de la renuncia puede ser alternativo, por telegrama o por escrito, solicito al señor diputado que se ubique en el segundo caso, y le pregunto en qué forma quedan satisfechas todas las garantías en esta circunstancia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: consideramos que la finalidad principal del inciso, que es precisamente la de evitar las renunciaciones anticipadas, se cumple también en el segundo caso porque la renuncia debe ser formulada por escrito ante la autoridad judicial o administrativa de la jurisdicción, con lo cual habrá completa

garantía de que es el trabajador quien personal y espontáneamente presenta la renuncia.

En cuanto a la exigencia del telegrama colacionado propuesta por el señor diputado Riso, la consideramos innecesaria porque de hecho a quien le interesa acreditar la prueba es al empleador y no al trabajador.

Sr. Vedia. — Acepto esa interpretación, porque la expresión «por renuncia... ante la autoridad judicial o administrativa...», da a entender efectivamente que es el propio interesado el que debe formular la presentación. Mi observación tendía a introducir una garantía más, una expresión más clara. No obstante creer que ése es el sentido usual de la expresión, ante la aclaración expresada por el señor diputado Pena no insisto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿El señor diputado Riso mantiene su propuesta de un agregado?

Sr. Riso. — No, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el punto 2º y subpunto A) del artículo 38.

— Resulta afirmativa de 93 votos; votan 104 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el subpunto B).

Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Comparto el concepto y los puntos de vista generales que se expresan en el inciso en consideración, pero me parece que no ha de haber estado en el ánimo de la comisión admitir que cualquier incumplimiento de las obligaciones del empleador dé origen a consecuencias tan graves como la ruptura del contrato de trabajo y el pago de las indemnizaciones por antigüedad y falta de preaviso.

Cuando se declara que el empleador puede unilateralmente dejar sin efecto el contrato de trabajo y despedir al empleado se incluye el caso de que el trabajador incurra en «negligencias graves o reiteradas en el desempeño de su tarea». En los demás casos se repite la nota de gravedad o reiteración con respecto a la conducta del empleado, que justifica el despido.

Parece, pues, una injusticia —y no habrá sido ése el ánimo de la comisión ni aplicarán tampoco los jueces ese tipo de disposiciones— entender que cualquier incumplimiento de obligaciones por el empleador dé, por sí solo, derecho a que el empleado se considere despedido.

Por eso estimo conveniente que todos los actos que se mencionan como causales de la rescisión del contrato por culpa del empleador se refieran a hechos graves o reiterados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: el dictamen en consideración tiende a cubrir con normas protectoras los derechos del trabajador. Cualquier incumplimiento del empleador con respecto a

las disposiciones legales, a los convenios colectivos o al contrato individual de trabajo, configura una injuria y faculta al trabajador a considerarse despedido. La gravedad de la injuria será juzgada judicialmente en el caso de que el empleador no pague la indemnización correspondiente. Por esa razón mantenemos el despacho.

Sr. Hardoy. — No entiendo al señor diputado. Al principio de su exposición afirma que cualquier incumplimiento del empleador configura el despido; y a continuación manifiesta que la gravedad de la conducta del empleador será apreciada por el juez que intervenga.

Considero que este último concepto debe ser la nota predominante, el criterio que la comisión acepte: que las actitudes del empleador deben revestir el carácter de graves o reiteradas.

Sr. Pena. — La comisión considera que el incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo por parte del empleador, facultan al trabajador a considerarse despedido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el subpunto B).

— Resulta afirmativa de 77 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el punto 3º y subpunto A).

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el apartado a).

— Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el apartado b).

Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Entiendo que finalmente la comisión y la Cámara, al votar en la sesión de ayer el artículo 31, admitieron que se pudiera suspender al empleado o trabajador cuando hubiera cometido delitos aun en perjuicio de terceros.

Aquí estamos previendo el caso de que en definitiva fuera condenado.

Si se mantiene la redacción actual, resultaría que mientras dura el proceso, el patrono lo puede suspender, pero cuando resulta condenado, tiene que reincorporarlo, salvo que el delito haya sido cometido en perjuicio del propio empleador.

Es decir que en el caso de que el delito se haya cometido contra terceros, al empleado se lo puede suspender hasta la condena, y cuando se lo condena, hay que reincorporarlo.

Entiendo que hay que corregir esta disposición.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Es éste uno de los casos especiales en que se prevé la rescisión del contrato por voluntad unilateral del empleador.

Los supuestos a que se refiere el señor diputado Hardoy están previstos en el apartado d), en cuanto establece que «las injurias del trabajador a la seguridad o a los intereses morales o materiales del empleador o su familia, serán prudentemente apreciadas por los jueces...»

Creo que de esta manera queda satisfecha la inquietud del señor diputado Hardoy.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — En este caso mejor será suprimir el inciso, porque volvemos a lo mismo: la comisión tiene una intención, pero la ley que se vota dice otra cosa.

La ley dice que sólo se puede echar al empleado cuando haya cometido un delito en perjuicio del empleador; pero si el delito se comete contra terceros, cuando se le condena, hay que reincorporarlo.

Me parece que lo lógico y razonable sería adecuar el texto de este artículo a lo que se votó en la sesión de ayer al aprobar el artículo 31.

Advierto que la aclaración del señor diputado Pena no es útil, y lo digo con todo respeto. No tiene sentido mantener este tipo de contradicciones en la ley.

Sr. Pena. — La comisión entiende que no hay contradicción, y mantiene el despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — En este caso tendría que quedar perfectamente claro —y me parece que va a ser difícil aclararlo— que la condena del trabajador por un delito cometido no en perjuicio del empleador, sino de un tercero, y ayer se dieron algunos ejemplos al respecto, constituye injuria a los intereses morales o materiales del empleador.

No veo cómo la condena por un delito cometido contra los bienes o la persona de un tercero puede constituir agravio o injuria a los intereses morales o materiales del empleador. Y sin embargo es eso lo que vendría a resultar de la interpretación que el miembro informante de la comisión da del inciso d) de este mismo punto.

Si quedara perfectamente aclarado que el sentido de este inciso d) es eso —cosa que no resulta, de ninguna manera, de su letra, de la inteligencia que hay que dar a las palabras que forman el mismo—, podría quedar el inciso b) tal como está redactado. Pero parece más lógico y coherente que si lo que se quiere decir es lo que afirma el señor miembro informante, se lo diga en el inciso b). Porque resulta bastante fácil decirlo: con suprimir algunas palabras estaría dicho, sin retorcer el sentido de los términos de ninguno de los dos incisos. No sé si he sido claro, pero me parece que sí.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión entiende que con las previsiones de los incisos d) y e) están sa-

tisfechas las observaciones formuladas por el señor diputado González Bergez y, por lo tanto, mantiene el despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el apartado b).

—Resulta afirmativa de 78 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el apartado c).

Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez.

Sr. Rodríguez. — El inciso c) es un poco confuso. Dice: «Por incapacidad del trabajador para cumplir con sus obligaciones excepto cuando fuere sobreviniente a la iniciación de la prestación de servicios.»

Quisiera que la comisión me aclarara quién va a determinar la incapacidad del trabajador, es decir, si es por voluntad del patrón o de común acuerdo con las comisiones internas, porque si dejamos librado a la patronal esta determinación puede haber represalias por cualquier circunstancia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Entiendo que este inciso c) debe ser suprimido porque las circunstancias que pondera no pueden darse en la práctica; en realidad no pueden existir en ninguna ocasión a poco que se lea su texto con detenimiento. Dice: «Por incapacidad del trabajador para cumplir con sus obligaciones, excepto cuando fuere sobreviniente a la iniciación de la prestación de servicios.» Es decir, incapacidad anterior a que comenzara a ejercitar el servicio. Si es anterior ¿cómo hubo posibilidad de que ese trabajador ingresara a la empresa? Es prácticamente imposible.

Sr. Garófalo. — Esto se refiere a incapacidad del trabajador durante el desarrollo del empleo.

Sr. Risso. — El señor diputado lo entenderá de esa manera, pero del texto, tal como está redactado, surge como imposible que en ninguna etapa pueda aparecer el trabajador con una incapacidad que no hubiera tenido antes de ingresar, porque si aparece ahora es sobreviniente, como lo dice el propio texto. Por lo tanto solicito lisa y llanamente la exclusión del inciso c).

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Garófalo.

Sr. Garófalo. — Por ejemplo, un patrono toma a un albañil. Durante la primera quincena el albañil está levantando un muro y lo hace más o menos bien. Pero después de ese lapso tiene que hacer un revoque y no lo sabe hacer. Demuestra no saber de albañilería. Entonces se aplica este inciso.

Esa es la intención del texto, más o menos aplicada a un caso particular.

Sr. Risso. — A propósito del ejemplo que formula el señor diputado Garófalo, entiendo

que el inciso no es de aplicación. Surgiría de ese ejemplo, que de esa manera se pretende establecer un período de prueba.

Por otra parte, cuando el empleador ha contratado los servicios del trabajador lo ha hecho en circunstancias definidas, para que realice tal o cual obra. Es decir, ha partido de la base de la existencia de una capacidad profesional para realizar el trabajo.

Sr. Garófalo. — Pero puede ocurrir que el obrero que se ofrece como albañil, que debe conocer todas las gamas del trabajo de albañilería después de quince días resulte que no las conoce.

Sr. Risso. — A mi juicio es un caso hipotético e inexistente en la realidad. Cuando se contrata un albañil es difícil que vaya un plomero. Será mejor o peor albañil a los ojos del empleador, pero cuando se contrata un albañil éste sabe cuál es su oficio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: Esta disposición existe en la legislación vigente y no ha planteado ninguna duda en cuanto a su interpretación. En verdad, el término «incapacidad» se refiere a la idoneidad del trabajador para desempeñar la tarea; está referido a aquellos supuestos en que los trabajadores tienen que tener cierta idoneidad técnica para el desempeño de su función, idoneidad que, en algunos casos, no pueden demostrar en los primeros días. Imaginemos el caso de un mecánico de precisión o de un ajustador de motores que recién termina su trabajo a los cuarenta o cincuenta días de su ingreso. Esa es, precisamente, la incapacidad que faculta al empleador para dar por rescindido el contrato de trabajo.

Por lo expuesto, la comisión mantiene la redacción del despacho, tal como figura en el texto ordenado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — La interpretación que hace el señor presidente de la comisión respecto del apartado que estamos considerando se asienta ante todo en el supuesto de que existía anteriormente en la legislación vigente. La existencia o no en la legislación vigente no le da categoría de que haya sido útil, ni justifica su inclusión en este nuevo proyecto por sí sola.

Por otra parte, de lo dicho no surge la explicación del fin del apartado c), y a lo sumo se está tratando de instrumentar una explicación de la existencia de un período de prueba amparado por este apartado c), lo que es diferente de lo que se desprende de la simple lectura del texto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el apartado c).

—Resulta afirmativa de 67 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el apartado d).

Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Es para solicitar al señor presidente de la comisión que tenga la amabilidad de informar si el delito cometido por un trabajador, sobre el que haya recaído sentencia definitiva, debe ser considerado de acuerdo con el texto que estamos por sancionar, como injuria del trabajador a los intereses morales y materiales que pueda dar lugar a su despido. Me refiero al caso de que el delito haya sido cometido en perjuicio de un tercero y no del propio empleador.

Sr. Presidente (Mor Roig.) — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Este aspecto ya ha sido considerado en oportunidad del tratamiento del apartado b). No podemos estar reproduciendo en cada oportunidad las opiniones dadas con anterioridad.

Sr. Hardoy. — Solamente pido que el señor diputado conteste por sí o por no. Le ruego muy respetuosamente informe a la Honorable Cámara y al país si el delito cometido por un trabajador en perjuicio de un tercero, sobre el que haya recaído sentencia definitiva, puede constituir injuria grave que pueda dar lugar a despido.

Sr. Pena. — Ante la insistencia del señor diputado Hardoy, aun repitiendo lo dicho anteriormente, contesto que sí.

Sr. Hardoy. — Quedo profundamente agradecido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el apartado d).

—Resulta afirmativa de 93 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el apartado e).

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el subpunto B.

Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La mayoría de la comisión ha introducido en este subpunto algunas modificaciones de redacción y, además, ha suplido una omisión involuntaria en el texto ordenado que está considerando la Cámara, de un párrafo que ya figuraba en el orden del día 211.

Solicito que por Secretaría se dé lectura a la redacción definitiva de este subpunto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Oliver). — Se reemplazará el último párrafo por el siguiente: «Dicho promedio no podrá exceder de un importe equivalente a un mes del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes, vigente al tiempo de la

extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a un mes normal del último salario del trabajador.»

A continuación se agregaría: «El empleador deberá comenzar los despidos por el personal menos antiguo del establecimiento o sección. Los despidos en violación del orden de antigüedad serán considerados sin causa justificada.» Ese es el párrafo omitido por error en el texto ordenado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: en los casos de despido por falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, la comisión ha considerado que la responsabilidad del patrono es mínima, pues, generalmente, son las circunstancias económicas del país las que producen la falta o disminución de trabajo.

En consecuencia, no se puede responsabilizar al empleador, y por ello se establece la media indemnización o indemnización simple como se la conoce comúnmente. Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Para hacer una pequeña acotación al último párrafo sugerido por la comisión. Donde dice: «el empleador deberá comenzar los despidos por el personal menos antiguo del establecimiento o sección», propongo cambiar la «o» por «y».

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la modificación que propone el señor Risso?

Sr. Pena. — Sí, señor presidente. La comisión ha sido consultada con anterioridad al respecto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el subpunto B, de acuerdo con la redacción propuesta por la comisión, de la que se ha dado lectura.

—Resulta afirmativa de 96 votos; votan 104 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el subpunto C.

Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — En el último párrafo de este punto C, inciso 3º, se anota el siguiente texto, cuya supresión voy a solicitar, para que forme parte integrante del inciso 4º, por las razones que voy a dar: «En los contratos a plazo fijo o por obra determinada, el despido sin causa justificada antes del vencimiento del plazo o terminación de la obra, importará, además, el pago total de los salarios que el trabajador hubiera percibido en el caso de cumplirse el contrato.»

Esta parte del inciso, que hace referencia al caso de los contratos de plazo fijo o por obra determinada, se concatena perfectamente con el inciso 4º, desde que en éste pareciera que se examina específicamente lo que ocurre en el caso

del despido en los contratos de plazo fijo o por obra determinada.

En consecuencia, si allí se legisla específicamente el despido con motivo de la terminación de la obra o el vencimiento del plazo, es menester que se registre la inclusión de este párrafo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión acepta que el último párrafo del apartado C del inciso 3º, se traslade al inciso 4º como párrafo final, por considerar que la proposición del señor diputado Risso es correcta y que mejora la claridad del despacho.

Además, hace presente que haciéndose eco de algunas sugerencias y observaciones llegadas fuera de término, propone la modificación del último párrafo del inciso c), una vez suprimido el referido a los contratos a plazo, y propone la redacción que obra en Secretaría, cuya lectura se solicita.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a dar lectura.

Sr. Secretario (Oliver). — En el apartado c) del inciso 3º se reemplaza el último párrafo por el siguiente: «Dicho promedio no podrá exceder del equivalente a tres meses el importe mensual del salario vital mínimo para el trabajador sin cargas de familia, sin aplicación de coeficientes vigentes al tiempo de la extinción del contrato. El importe total de la indemnización en ningún caso será inferior a dos meses del último salario normal del trabajador.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Señor presidente: entiendo que la comisión acaba de aceptar que el párrafo final del inciso 3º, que viene después del apartado c), pasa a integrar el inciso 4º.

Sin perjuicio de la objeción que nuestro bloque va a formular a la disposición misma, entendemos que no es conveniente incorporar ese texto al inciso 4º. Se lo debe dejar donde está, porque prevé el caso de rompimiento del contrato por voluntad unilateral del empleador, mientras que el inciso que sigue se refiere al caso de vencimiento del plazo o terminación de la obra, es decir donde, en definitiva, se aplica el acuerdo o las dos voluntades del acuerdo, de que el contrato durará lo que dure la obra. Por eso estimo mejor que se considere y se resuelva la suerte de este apartado en el lugar donde está ahora en el proyecto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿La comisión mantiene su punto de vista?

Sr. Risso. — Señor presidente: es para aceptar, como muy atinada, la reflexión que hace el señor diputado Hardoy. En el primer caso se habla de la rescisión unilateral, en tanto que en el inciso 4º se hace referencia a la rescisión por mutuo consentimiento del contrato de trabajo. En consecuencia, retiro la moción formulada.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Es precisamente para referirme a este último párrafo del inciso 3º. Cambiando los criterios que prevalecen en la actualidad, se establece que la ruptura injustificada por voluntad patronal del contrato a plazo fijo o para obra determinada entraña la obligación de pagar las indemnizaciones ordinarias de despido y, además, los salarios que habrían correspondido hasta el final de la obra o del plazo convenido para el contrato. Vendría a ocurrir, de esta manera, que se indemnizaría en una forma especialísima —ya veremos cómo en los hechos esto no ha de ocurrir— al contratado por obra o plazo determinado, mejorándolo en relación con el trabajador que, cualquiera sea el tiempo de antigüedad que tenga en su empleo, tratándose de contrato por tiempo indeterminado, sólo tiene derecho a la indemnización por despido injustificado.

Parece lógico y razonable que para los casos de contratos de plazo fijo o para obra determinada se dé al trabajador el derecho de optar entre cobrar todos los salarios que estuvieron en su previsión cuando concertó el contrato, es decir todos los salarios que debía cobrar hasta el final de la obra o del plazo convenido, o, si le conviniera, más la indemnización por despido que establece la ley.

La opción parece justa. Entiendo que la suma de las dos indemnizaciones, en cambio, no tiene sustento jurídico, y además hago notar que esta duplicación de la indemnización sería burlada, si esto se convirtiese en ley, con una extraordinaria facilidad, con tanta facilidad que esto quedaría exclusivamente en letra muerta, algo así como un «engaño pichanga» para los trabajadores. Por supuesto, el empleador que se encuentre en este caso y decidido a romper el contrato con el trabajador dependiente, lo que hará no será notificar el despido anticipadamente al vencimiento del contrato, porque eso le va a significar una indemnización enorme, sino que solamente aliviará de tareas al trabajador y le pagará sus salarios hasta el final del contrato. Tendrá, entonces, solamente que pagar los salarios y no la indemnización que le correspondería, lo cual en muchos casos puede significar un perjuicio para el trabajador.

Creo, pues, que lo justo y lo conveniente, desde todo punto de vista, para la mejor protección de los derechos de los trabajadores, es dar una distinta redacción a este párrafo, en forma tal que el trabajador agraviado por el despido pueda optar por una u otra indemnización. Esto se logra fácilmente modificando muy pocas palabras. El párrafo quedaría redactado de la siguiente manera: «En los contratos a plazo fijo o por obra determinada, en caso de despido sin causa justificada antes del vencimiento del plazo o terminación de la obra, el trabajador podrá optar por el pago total de los salarios que hubiera percibido en el caso de cumplirse el contrato.»

Lógicamente, la otra alternativa de la opción es la indemnización que prevén las demás disposiciones del inciso.

Esta proposición está fundada no sólo en los principios generales del derecho, sino también en algunas normas de lógica que en este caso contemplan los derechos del trabajador.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Voy a referirme, señor presidente, a la sugerencia que formula el señor diputado González Bergez.

De ninguna manera la comisión participa del concepto vertido por el señor diputado en cuanto pareciera superabundante que el trabajador por obra determinada o a plazo fijo, en cierto momento pudiera tener derecho, además, de percibir la indemnización por despido injustificado, al cobro de los salarios por el tiempo en cuyo plazo estaba obligado el empleador a conservarle el puesto.

Las razones surgen con suma fluidez a poco que se examine que se trata de un contrato que reviste características especialísimas. El trabajador contratado por obra determinada, o en un plazo fijo, generalmente es un trabajador especializado y la índole del plazo fijo o de la obra determinada lo ubica en una disminución de posibilidades frente al común de los trabajadores, a aquel que se enrola con la patronal en forma o por tiempo o plazo indeterminado. De modo que la ley ha recogido esta doble indemnización: una que participa en lo laboral con respecto al despido injustificado del texto y del espíritu de la ley, que habla del resarcimiento del despido injustificado en la forma prescripta por el texto que venimos analizando, y una compensación, o resarcimiento con el sentido civilista que tienen los daños y perjuicios que provocan el rompimiento del contrato; que sería esa otra cláusula que establece el pago de los salarios hasta el día del vencimiento del contrato o de la terminación de la obra.

Sr. González Bergez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Risso. — Sí, señor diputado, si lo autoriza la Presidencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Quiero aclarar que la indemnización por despido es siempre un resarcimiento de daños, que reviste una especial forma por las especiales características, también, del contrato de trabajo y de los intereses de las partes. Hay una doble indemnización, un doble resarcimiento, entonces.

Señalo también que en algunas circunstancias, desde luego, puede tratarse de trabajadores especializados, pero en otras no. El caso típico es el de los obreros de la construcción. Los albañiles no tienen ninguna especialidad bien demarcada. Y resulta muy claro del texto, que emplea

la palabra «además», que aquí corresponden las dos indemnizaciones.

Y, por último, todavía queda en el aire aquello que dije sobre la extrema facilidad con que se puede eludir el artículo, concediendo unas vacaciones extralegales al trabajador, de modo tal que éste llegaría a la finalización de la obra sin haber cobrado otra cosa que sus salarios y no la otra indemnización a que podría tener derecho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — El señor diputado González Bergez, en sus expresiones, ha ido a la nota que yo apunté. Por un lado —dije— está el trabajador especializado, que es contratado para obra determinada o a plazo fijo, que es más o menos lo mismo en la práctica; por otro lado está el caso que cita el señor diputado González Bergez, cuando se trata, por ejemplo, de los obreros de la construcción que no gozan de esa semiplena estabilidad que tienen los restantes trabajadores que figuran enrolados en las empresas —señalé— por tiempo indeterminado.

Precisamente la ley lo ha querido así, y no este texto sino la vieja ley 11.729, así como la jurisprudencia que interpretó fielmente ese texto con la aclaración que he dejado formulada, es decir, tratando de compensar las menores posibilidades que tiene el trabajador en ese segundo caso. Por ejemplo, a los obreros de la construcción se ha tratado precisamente de mantenerlos en su empleo por lo menos durante el tiempo que convinieran con el empleador que habrían de desempeñarse a sus órdenes.

Hay un principio, que el señor diputado González Bergez no ignora, que es un axioma en materia civil: los contratos se hacen para ser cumplidos. No debe alarmarse el señor diputado ante el hecho de que el patrón tenga que hacer frente en determinadas circunstancias —es decir, cuando viola el contrato— a estas indemnizaciones o como quiera llamarlas el señor diputado González Bergez, ya que el autor de la violación legal es precisamente el patrón. Frente a la violación de la ley, cabe toda la responsabilidad que la misma ley fija, inclusive el pago de esta doble indemnización.

Sr. González Bergez. — Es claro. Pero también en los casos corrientes el quebrantamiento del contrato obliga a indemnizar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Por las razones que ha dado el señor diputado Risso y, además, por entender que debemos tender a mantener la estabilidad por la duración del contrato o de la obra, la comisión mantiene su despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el subpunto C) y el último párrafo del punto 3º del artículo 38.

—Resulta afirmativa de 88 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el punto 4º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el punto 5º.

Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Creo que por un error de imprenta en el párrafo final del punto 5º se dice: «...lo que los derechohabientes perciban de seguros constituidos...» Debe decir: «...por seguros constituidos...»

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

Sr. Pena. — La comisión acepta, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el punto 5º con la modificación propuesta por el señor diputado Risso y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 91 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el punto 6º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el punto 7º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el punto 8º.

Tiene la palabra el señor diputado Fabrizio.

Sr. Fabrizio. — Al parecer los redactores del dictamen, en este punto que se refiere a la jubilación del trabajador, han entendido que tal jubilación es obligatoria. No participo de ese criterio, porque si bien es cierto que nuestro régimen previsional fija topes de edad, sin embargo debiera permitirse extender la posibilidad de trabajo cuando el empleado tiene la voluntad y está en condiciones físicas de hacerlo por un tiempo mayor.

La disposición incluida en el punto 8º importará, en ciertas actividades, un suculento beneficio para los empleadores que de esta manera reemplazan a empleados que por antigüedad han alcanzado los más altos niveles en la escala de remuneraciones por otros que, desde luego, al ingresar perciben menores salarios.

Por otra parte es un hecho evidente y conocido que nuestros trabajadores están pensando, al término de la edad que señala el régimen de previsión para jubilarse, en la necesidad inmediata de buscarse un nuevo trabajo, lo que importa restar posibilidades de trabajo e incluso entregar sus fuerzas por debajo de las exigencias de nuestro régimen laboral.

Nada quitaría al propósito de la ley suprimir totalmente este punto 8º. Con ello reduciríamos

la gran preocupación que tienen las autoridades de las cajas previsionales y se permitiría que los hombres de trabajo, aquellos que entienden que la jubilación importa un derecho, sigan realizando sus tareas habituales.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Romano.

Sr. Romano. — Entendemos que el punto 8º es de evidente necesidad.

Sabemos que las cajas de previsión presentan una serie de deficiencias que este Parlamento y el gobierno deben superar. En la práctica ocurre que, desgraciadamente, los trabajadores que se acogen a los beneficios jubilatorios, tienen que esperar hasta 10 ó 12 meses, si no más, para percibir sus haberes jubilatorios.

Si bien la jubilación es un derecho y no una obligación, la comisión no hizo más que tomar lo que está legislado en la actualidad: el empleador tiene la facultad de preavisar a quienes se encuentran en condiciones de jubilarse por el término de ley, o sea dos meses.

Entendemos que el trabajador que inicia sus gestiones para obtener su jubilación, merece ser protegido. No queremos que se lo indemnice o se amplíen los términos del preaviso, sino que se le proporcione la oportunidad de poder tener una entrada mensual hasta tanto la caja le otorgue su beneficio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — En el debate en general advertí sobre los problemas que podrían, crearse o derivarse de la aplicación de este inciso, y ahora solicito, en consecuencia, la supresión en el segundo párrafo de las palabras «por el plazo máximo de un año», y en el tercer párrafo de los vocablos «o cumplido el plazo de un año».

Solicito esta supresión de términos para evitar que vencido el plazo de un año se extinga el contrato de trabajo en aquellos casos en que los organismos previsionales aún no hubiesen otorgado el beneficio jubilatorio al trabajador, perjudicando a éste.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — En este inciso 8º se advierte la falta de algo, que hace a aquello que la comisión y los señores diputados, cuando muestran su preocupación en el análisis de esta ley de contratos de trabajo, han puesto de manifiesto, es decir, tutelar al obrero en todas las instancias, naturalmente cuando lo merezca, y no existan causas que le sean imputables para la ruptura del contrato de trabajo. El caso típico se da en este inciso 8º, referido al obrero que por razones de trabajo y de edad ha llegado al límite en el cual le corresponde hacer uso del derecho a obtener la jubilación, que es un derecho y a la vez un deber, tal como está redactado el texto de este inciso 8º. Significa, lisa y llanamente, lo siguiente: del texto se desprende que cuando el trabajador se encuentre en condiciones de obtener su jubilación ordinaria in-

tegramente, el patrono, advirtiendo las circunstancias de edad y de antigüedad en el trabajo, podrá intimarlo, es decir, podrá ejercer el derecho de opción.

Con esto eliminamos la duda o preocupación del señor diputado Fabrizio, porque podría ocurrir que el patrón no se acoja al derecho que le acuerda el inciso. El texto expresa que podrá intimarlo para que inicie los trámites jubilatorios y estará obligado a mantenerlo en el puesto durante el plazo de un año. Si se otorga el beneficio no hay problema. Vencido el plazo se considerará —dice la última parte de este inciso— que concluye el contrato. Pero transcurrido el plazo sin haber obtenido el beneficio, el trabajador se encontrará embretado en una situación que, en la mayoría de los casos, es ajena a su voluntad.

Precisamente, tratando de tutelar esa circunstancia es que voy a proponer a la comisión, adopte la sugerencia de redactar este último párrafo de la siguiente manera: cumplido el plazo de un año se extingue el contrato, en cuyo caso el empleador deberá abonar al trabajador el importe de las indemnizaciones que señala el artículo 38, inciso 3º, apartado B). Es lo que antiguamente se conocía como la indemnización simple. Es decir que en esta etapa, cuando el trabajador se ve precisado, por la rescisión o extinción del contrato de trabajo, a dejar sus labores, y cuando aún no ha obtenido el beneficio de la jubilación, se verá, a una edad muy avanzada, en la mayoría de los casos, desprovisto de todo medio de subsistencia. Entiendo que no es eso lo que quiere el legislador y mucho menos el proyecto que examinamos. Precisamente, traigo en acopio o abono de la interpretación que formulo, el caso en que se ha ubicado la comisión y la Cámara que ya ha aprobado artículos anteriores de parecidas características, como por ejemplo aquel que hace referencia al empleador que se ve obligado al cese de sus actividades por disminución o falta de trabajo. También en ese caso el empleador es ajeno al cese o disminución de trabajo como lo es igualmente el trabajador. En ese caso la ley autoriza a este último a percibir, de manos del patrón una indemnización equivalente a la que señala el artículo 38, inciso 3º, apartado B).

Quiero proponer también en estas circunstancias en que el trabajador se ve desamparado por fallas —llamémosle así— que a veces se producen en el funcionamiento de las cajas, por motivos que no le son imputables, que obtenga el amparo, por lo menos en ese mínimo de una indemnización que antiguamente era conocida como simple y que ahora se legisla en el referido apartado B) del inciso 3º del artículo que estamos examinando.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Fabrizio.

Sr. Fabrizio. — Acepto la preocupación previsional del artículo en cuanto se refiere a cubrir una etapa que generalmente es bastante larga, como la que demandan los trámites para acoger-

se a la jubilación. Pero mi intención al proponer el rechazo del artículo se refería a la posibilidad o facultad que le da el mismo al empleador de intimar u obligar al empleado a hacer abandono del trabajo. Vuelvo a repetir que en nuestro país es conocido el hecho de que en buena medida los hombres de trabajo, llegados a la edad de la jubilación, se acogen a sus beneficios e inmediatamente tienen que salir en busca de trabajo porque los beneficios jubilatorios, lamentablemente, quebrantan su nivel de vida porque son insuficientes, demasiado bajos.

Por eso al peticionar la supresión de esta facultad del artículo —la intimación de abandono del trabajo del hombre que tiene voluntad y condiciones para permanecer en su posición— pido concretamente que se suprima la primera parte del inciso 8º y que la segunda se reemplace por el siguiente texto: «A partir del momento en que el empleado inicie los trámites para acogerse a los beneficios de la jubilación, el empleador...» y sigue el texto tal cual está impreso.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — La preocupación de los señores diputados Fabrizio y Risso, que comparto en su amplitud, está contemplada en un proyecto de ley que la Comisión de Previsión Social ha despachado en los últimos días. Dicho proyecto lo presenté en el curso del año anterior, y en virtud del mismo los afiliados a todas las cajas podrán iniciar los trámites para obtener su jubilación continuando en el desempeño de sus tareas hasta el último día del mes en que la caja respectiva comunique que ha sido acordado el beneficio.

Dice el artículo 3º que la iniciación del trámite no podrá ser invocado por el empleador como decisión definitiva de finalizar el contrato de trabajo hasta que no sea concedido el beneficio. De esta manera la preocupación del señor diputado Risso está ampliamente cubierta con este despacho que, por ser unánime, estimo va a obtener sanción de esta Cámara en las próximas horas. De manera que todo el problema que aquí nos está preocupando queda totalmente desplazado con la sanción de esta ley que tiene carácter general para los afiliados a todas las cajas del sistema previsional. Creo que con esto se avientan las preocupaciones e incluso la del señor diputado Fabrizio tampoco tiene relevancia porque el trabajador recién cesa en el empleo al mes siguiente de empezar a cobrar la jubilación.

Sr. Risso. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Martínez Raymonda. — Con mucho gusto.

Sr. Risso. — Recuerdo haber leído esta mañana el proyecto del señor diputado Martínez Raymonda en la Comisión de Previsión y Seguridad Social y entiendo que contempla la mayoría de las preocupaciones que hemos esbozado sobre

este punto, pero hay algo que advierto en ese texto y es que el empleador debe conservar al trabajador en el puesto hasta tanto le sea otorgado el beneficio jubilatorio. Me atrevería a decir que en esa situación que se plantearía, a la que, en muchos casos, serían ajenos el patrón y el trabajador, aunque hayan cumplido con los aportes y los requisitos que les exige la caja para obtener la jubilación, podría darse este otro supuesto quizás más grave que el que yo enuncié, por vía del otorgamiento de una indemnización en los términos que señalé anteriormente.

Podría ocurrir, que por razones de edad o de salud, contingencias que son ajenas al patrón, éste se viera obligado, sin embargo, a mantener a un obrero que ya no está cumpliendo con sus obligaciones en la medida que lo exigen los intereses del empleador.

Evidentemente, no me puedo ubicar en el plano de la defensa del patrón, *a outrance*, ni tampoco en la posición de abandonar al obrero. Quiero una etapa intermedia y por eso dije antes, siguiendo la inteligencia de este proyecto, que, así como en oportunidad de analizar el despido por falta de trabajo se establecieron indemnizaciones de las llamadas simples, también en este caso, para una emergencia similar, cabe aplicar, luego del año que contempla este artículo, la indemnización del artículo 38, inciso 3º, apartado B).

Sr. Presidente (Mor Roig). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Martínez Raymonda.

Sr. Martínez Raymonda. — Ocurre que con la solución del señor diputado Risso la ineficacia o la mora del sistema previsional se la haremos pagar al patrón, cosa que tampoco parece muy equitativa como solución para este problema.

Sr. Risso. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Martínez Raymonda. — Sí, señor diputado.

Sr. Risso. — De la otra manera también se le hace pagar al patrón, porque se lo obliga a mantener a un empleado que no rinde en la medida del salario que percibe.

Sr. Martínez Raymonda. — Cuando eso ocurre por razones de salud, hay en el sistema previsional normas preferenciales para acelerar el proceso en los casos de invalidez o enfermedad.

Quiero señalar la existencia de este proyecto, que cubre todo el evento y que es más amplio, inclusive, que el artículo, que limita a un año la protección de la ley.

De todas maneras este inciso octavo del artículo 38 incursiona en toda la estructura del sistema previsional argentino. Observo que mientras el sistema previsional exige la renuncia y la cesación efectiva en el trabajo para iniciar los trámites jubilatorios, nosotros, por vía de esta ley, estamos modificando, indirecta y colateralmente, todo el proceso del trámite, sin

tener la legislación que realmente modifica aquel sistema.

Puede ocurrir que el patrón deba mantener al empleado durante un año por este inciso y que la caja no le permita iniciar los trámites porque no hay cesación de servicios. Entonces estaríamos dando un año teórico, porque la realidad absoluta es que con el actual régimen, salvo la situación de los bancarios, docentes y personal del Estado, que son los únicos tres sectores que gozan del beneficio de la renuncia condicionada, el resto, entre ellos comercio e industria, sectores a los que está dirigida especialmente la ley, no podrá iniciar los trámites jubilatorios.

Sr. Risso. — ¿Me permite una aclaración, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Martínez Raymonda. — Sí, señor diputado.

Sr. Risso. — Cuando formulé mi proposición tuve presente, precisamente, el proyecto del que es autor el señor diputado, es decir que consideré la posibilidad de que se instituyera la renuncia condicional.

Sr. Martínez Raymonda. — En una palabra, dejo advertida a la Cámara esta circunstancia y que esta disposición, sin el complemento del despacho sobre régimen previsional, tiene la grave dificultad que señalo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Monte, para una segunda intervención de cinco minutos.

Sr. Monte. — Serán menos de cinco minutos, señor presidente.

Advierto en la propuesta del señor diputado Risso la virtud de satisfacer la inquietud del señor diputado Fabrizio, por cuanto al disponer una indemnización para el caso de que el empresario opte por despedir al trabajador después de cumplido el año establece un freno en tal sentido.

Por otra parte, satisface también mi inquietud, porque al extinguirse el contrato luego de vencido el año de plazo, el trabajador no queda desprotegido.

Con respecto a lo que propone el señor diputado Martínez Raymonda, advierto que hay aquí una opción y entonces el empresario no tendrá que cargar obligatoriamente con responsabilidades, ya que en la primera parte de este inciso se dispone que podrá intimar al empleado a iniciar los trámites jubilatorios.

Sr. Martínez Raymonda. — La opción se establece en el inciso 8º.

Sr. Monte. — Exacto, señor diputado. Hay una opción, de modo que si el empresario carga con la responsabilidad de indemnizarlo será porque ha querido hacer uso de esta opción que le acuerda el inciso 8º.

Además, refiriéndome concretamente a lo que se dispone en el proyecto del señor diputado Martínez Raymonda, que ha sido despachado por unanimidad, se me ocurre que complementa la iniciativa del señor diputado Risso que estamos considerando.

En consecuencia, como considero que dicha iniciativa auna las distintas opiniones y satisface la mayoría de las inquietudes, por mi parte me declaro conforme con la proposición y retiro la que había formulado para adherir a la del señor diputado Risso.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Nosotros nos pronunciamos por modificar el inciso 8º del artículo 38 de la ley.

Evidentemente, compartimos la opinión de que la jubilación no es un derecho del empleador que pueda imponerse al trabajador sino, al contrario, un beneficio al cual el propio trabajador tiene derecho a acogerse.

Además, nos parece que el índice de edad laborable se modifica al ritmo del mejoramiento de las condiciones generales de vida, lo que hace que no pueda establecerse el momento en que el trabajador puede jubilarse como el instante en el cual deba cesar en sus tareas.

Por estas razones proponemos el reemplazo de este inciso 8º por otro que establezca exactamente lo contrario y que diría así: «El empleador no podrá despedir al trabajador por el solo hecho de que éste se encuentre en condiciones de jubilarse; pero si el trabajador optara por acogerse a los beneficios jubilatorios el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el organismo previsional otorgue el beneficio, sin que sea necesaria la previa cesación en sus funciones.»

Es evidente que por esta vía alguna modificación se introduce al régimen previsional, pero nos parece razonable que ella se haga en tanto venga una modificación de fondo, que por otra parte tarda en llegar. Mientras tanto, nosotros debemos atender al caso concreto que se nos plantea en el proyecto que estamos considerando.

En estos términos dejo planteada nuestra proposición.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vázquez Pol.

Sr. Vázquez Pol. — Señor presidente: una cosa es la Argentina ideal que todos deseamos y otra la Argentina real en que vivimos. El desiderátum del hombre de trabajo sería que, llegado el término de la edad, pudiera jubilarse. Esto sería lo justo, la retribución acorde con el esfuerzo realizado, la jubilación por medio del ahorro efectuado a través de treinta años de labor. No como una dádiva o una prebenda.

Pero tal como ocurren las cosas, cuando el hombre de trabajo llega a esa situación de poder jubilarse, resulta que por el régimen previsional argentino su capacidad económica se ve totalmente disminuida. Como consecuencia, para seguir manteniendo su vida en un plano digno y económico, se ve precisado a continuar trabajando. Este es el meollo de la cuestión.

Lo ideal sería que a los treinta años de trabajo el patrono tuviera la facultad de pedir al tra-

bajador que inicie su trámite jubilatorio, pero nos encontramos con que en el momento en que el hombre es más apto, más eficiente para la tarea y sirve mejor al país, se ve obligado a restringir los ingresos y como consecuencia no podemos —a pesar de que el desiderátum de la idea sería que a los treinta años pudiera jubilarse— impulsar a ese hombre, que dio todo su esfuerzo a la República, condenándolo a una situación deprimente.

Estoy de acuerdo con el espíritu de este artículo; con lo que no estoy de acuerdo es con que el patrono tenga la facultad de obligarlo a jubilarse, y no se deje en libertad de acción al trabajador para que él sea quien disponga esa instancia de su vida y no a través de esta ley.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Romano, para una segunda intervención de cinco minutos.

Sr. Romano. — Señor presidente: voy a insistir en la necesidad de que se mantenga el artículo tal cual está redactado. Las nuevas variantes aquí surgidas no solucionan el problema.

Entendemos que la jubilación se ha instituido para que el trabajador goce de ella, dejando de trabajar en el momento en que ha cumplido cierto número de años. Nuestro sistema previsional contempla perfectamente esa situación, y estimamos que las variantes aquí planteadas tienden a alargar el número de años necesarios para que el trabajador pueda jubilarse.

No creemos que sea una solución para el obrero trabajar en deplorables condiciones físicas cuando alcanza la edad de sesenta y cinco o setenta años.

Consideramos que es obligación del gobierno y del Parlamento superar de una vez por todas la situación lamentable en que se encuentran las cajas de jubilaciones. Por todo ello, y hasta tanto eso no ocurra, creemos que el trabajador debe acogerse a los beneficios de la jubilación a la edad de cincuenta y cinco años y que el patrón debe brindarle protección durante un año hasta que aquél logre concretar los beneficios jubilatorios.

Sr. Presidente (Mor Roig.) — Tiene la palabra el señor diputado Rizzo.

Sr. Rizzo. — Quiero hacer una breve aclaración a lo manifestado anteriormente y consignar el texto de la modificación a este artículo que propongo a la comisión.

El párrafo 2º se mantendría de esta manera: «A partir de este momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el organismo previsional otorgue el beneficio. Otorgado éste se extingue el contrato de trabajo. Si la jubilación no le fuera acordada al trabajador en un plazo no mayor de un año, por causas que no le sean imputables, el empleador podrá —y pido a la Honorable Cámara que examine esta propuesta—, o mantener la relación laboral hasta tanto se acuerde el bene-

ficio, o declarar extinguido el contrato, abonando la indemnización del artículo 38, inciso 3º, apartado B».

Esto tiende a conciliar la propuesta del señor diputado Martínez Raymonda, en cuanto él quería que el trabajador fuera mantenido en su puesto hasta tanto le fuera acordado el beneficio jubilatorio.

A la vez concilia la propuesta original mía, en cuanto solicitaba que vencido el año, el trabajador, por motivo de la extinción del contrato, debía percibir una indemnización equivalente a la que postula el apartado B del inciso 3º de este artículo.

De esta manera que propongo, no obligamos al patrón a tomar la vía del pago de la indemnización, porque previamente le damos la posibilidad de que continúe usando de los servicios del trabajador hasta tanto le sea acordado el beneficio jubilatorio, tal como lo quiere el señor diputado Martínez Raymonda.

Pero por las razones que di a mi vez, cuando impugnaba de alguna manera la proposición del señor diputado Martínez Raymonda, de que el patrón pueda verse obligado a prescindir de los servicios del trabajador en razón de su estado de salud, de su edad o de una nueva racionalización de la empresa, es decir, que no se trata de un acto inconsulto, arbitrario o perjudicial para los intereses del trabajador, solicito que se incluya como indemnización para el caso la prevista en el artículo 38, inciso 3º, apartado B.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: el señor diputado Romano, miembro de la comisión, ha sintetizado las razones fundamentales por las cuales se ha incorporado el inciso 8º en el artículo 38.

Además, debemos señalar que con esta disposición se mejora la situación actual del trabajador en condiciones de jubilarse, pues solamente se le acuerda el preaviso común.

Por otra parte, las cajas no pueden ignorar las disposiciones de esta ley, en consecuencia, no podrán exigir la renuncia efectiva al trabajo e iniciarán los trámites con la certificación de los servicios que el empleador entregará en cada oportunidad.

Nos oponemos al pago de la indemnización, propuesta por el señor diputado Rizzo, por entender que no hay responsabilidad del empleador y, por lo tanto, no parece justificada.

Por las razones que he sintetizado la comisión mantiene su despacho.

Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el inciso 8º conforme al despacho de la comisión.

—Resultado afirmativa de 76 votos; votan 108 señores diputados.

Sr. Izetta. — Pido que se rectifique la votación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a rectificar la votación.

— Resulta afirmativa de 99 votos; votan 111 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde votar el agregado propuesto por el señor diputado Risso.

Sr. Vedia. — Pido que previamente se dé lectura de su texto.

Sr. Risso. — Con el permiso de la Presidencia voy a dar lectura del agregado que propongo. A continuación de la palabra «contrato» se agregaría el siguiente párrafo: «Si la jubilación no hubiese sido acordada por causas que no sean imputables al trabajador, el empleador podrá mantener la relación laboral hasta tanto se acuerde el beneficio o declarar extinguido el contrato abonando la indemnización del artículo 38, inciso 3º, apartado B).»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el agregado propuesto por el señor diputado Risso que la comisión no ha aceptado.

— Resulta negativa de 70 votos; votan 110 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 39.

Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Por el artículo que está en consideración se establece que cuando el trabajador se hubiera desempeñado por un término menor de tres meses el patrón puede despedirlo pagándole un tercio de la indemnización común. Pido la supresión lisa y llana de este artículo, porque considero que mantenerlo es peligroso, ya que se volvería a establecer el odioso sistema del trabajador a prueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la supresión propuesta por el señor diputado Ocampo?

Sr. Pena. — No, señor presidente. La comisión mantiene este artículo y considera que el mismo no da lugar al establecimiento del obrero a prueba, como manifiesta el señor diputado Ocampo, y sí da seguridad a las partes en la relación laboral.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Díaz.

Sr. Díaz. — Nuestro sector apoya la proposición del señor diputado Ocampo porque entiende que esta cláusula desvirtúa la intención que nos ha guiado al proyectar la ley. Por otra parte, entiende que la permanencia de esta disposición traería como consecuencia la restauración de lo que hemos querido desterrar, o sea el período de prueba, máxime que en el proyecto se prevé que solamente tendrá derecho a percibir el importe del monto indemnizatorio cuando el despido se considere injustificado. Esta disposición puede dar lugar a que la patronal, aco-

giéndose a ella, argumente que el despido es justificado, lo que traería como consecuencia la permanencia del período de prueba, aspecto al que nos hemos opuesto, por lo que vamos a votar por la supresión lisa y llana del artículo en consideración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 39 del despacho.

— Resulta afirmativa de 92 votos; votan 106 señores diputados.

Sr. Avila. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Avila.

Sr. Avila. — Es para proponer el agregado de un nuevo artículo que podría figurar como 39 bis o 40.

Al considerarse el artículo 31, por el que se establece la obligación del empleador principal de hacerse responsable de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo del subcontratista o del contratista, iba a proponer un agregado en su parte final, pero como el que voy a proponer a continuación tiene relación directa con los casos de despido, y en el capítulo que estamos por aprobar se contemplan los casos de despido, propongo en esta oportunidad un nuevo artículo que, como dije, podría llevar el número 39 bis o 40.

El artículo que propongo dice así: «En los casos del artículo 31 el empleador principal que fuere demandado por indemnización a raíz del despido dispuesto por un contratista o subcontratista, podrá optar hasta el momento de contestar la demanda por crear una relación directa con el trabajador, abonándole los salarios que haya dejado de percibir. En este caso el trabajador podrá optar, a su vez, por la indemnización que legalmente le corresponda, que sólo podrá reclamar del contratista o subcontratista o bien podrá optar por el vínculo directo con el empleador principal, conservando su antigüedad». Esto tiene la siguiente explicación.

Hay contratistas o subcontratistas que tienen elevado número de trabajadores a su cargo. De mala fe el subcontratista puede dejar cesante o despedir a un elevado número de ellos y crearle así al empleador principal la delicada situación de tener que afrontar una indemnización que puede llegar a ser varias veces millonaria; es decir, que involuntariamente se coloca el empleador principal en una difícilísima situación económica. A la vez, podría colocarse también al trabajador en una difícil situación. Es corriente que en épocas de desocupación, de desempleo, el trabajador, en muchas oportunidades tenga que deambular durante varios meses para conseguir trabajo. ¿Por qué colocar a ese trabajador en una situación de despido si el empleador principal quiere crear con él una relación directa de dependencia? El trabajador, colocado en esa necesaria situación de despido, puede llegar a gastar los pesos que ha recibido y encontrarse sin

trabajo. Por eso, a los efectos de procurar beneficiar a las dos partes, al empleador principal para que no se vea en la necesidad de tener que abonar una indemnización que puede llegar a ser millonaria, y al trabajador para no llevarlo a la situación desagradable de no tener empleo, es que propongo este nuevo artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión no acepta el agregado propuesto, por las siguientes razones.

Es evidente que el contrato laboral es consensual y no podemos imponerlo por una disposición legal. Estimamos que el artículo propuesto no traerá ninguna ventaja y sí dará lugar al nacimiento de un contrato por una disposición de la ley sin tener en cuenta la voluntad de las partes.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Avila.

Sr. Avila. — En este caso la opción se da a ambas partes, al empleador principal y al obrero o empleado, y si las dos partes aceptan la opción yo no veo qué inconvenientes puede haber en aceptar el agregado del artículo que propongo. Por él se procura beneficiar a las dos partes y cualquiera de ellas que no quiera acogerse a los beneficios que el mismo determina no está obligado a hacerlo, ni tampoco se le compele a aceptarlos.

Sr. Pena. — La comisión mantiene su criterio.

Sr. Presidente (Mor Roig) — Se va a votar el artículo nuevo propuesto por el señor diputado Avila, que iría a continuación del artículo 39, no aceptado por la comisión.

—Resulta negativa de 54 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Avila. — Pido que se rectifique la votación.

Sr. Ocampo. — ¿Para esta votación se requiere también mayoría de dos tercios?

Sr. Presidente (Mor Roig). — De acuerdo con lo resuelto por la Honorable Cámara, sí, señor diputado.

Se va a votar si la Honorable Cámara se ocupa de la indicación del señor diputado Avila, de incluir un artículo nuevo a continuación del artículo 39.

—Resulta negativa de 79 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 40.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 41.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 42.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 43.

Por Secretaría se va a enunciar un agregado propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Oliver). — Al final del artículo 43 iría el siguiente agregado: «Tampoco estarán sujetas a embargo y regirá para ellas lo dispuesto en el artículo 14».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Es para sugerir la substitución de las palabras «al impuesto a los réditos» por «ni retenciones impositivas». Entiendo que de esta forma la redacción es más comprensiva.

Sr. Pena. — La comisión entiende que en este supuesto no puede darse otra posibilidad que la del impuesto a los réditos, pero acepta la modificación, para satisfacer la inquietud del señor diputado Risso, por si en el futuro se creara otro gravamen.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Me parece que lo lógico es hacer referencia al pago de impuestos y decir que «no estarán sujetas a aportes jubilatorios ni al pago de impuestos».

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta por el señor diputado Vedia?

Sr. Pena. — Sí, señor presidente, porque esa redacción resulta más correcta.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 43 con el agregado propuesto por la comisión y la modificación sugerida por el señor diputado Vedia y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 92 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 44.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 45.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 46.

Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Señor presidente: es para solicitar una nueva redacción de este artículo, que resultaría más claro y preciso si se le enuncia de esta manera: «Los accidentes, las enfermedades inculpables y la huelga decretada por asociación profesional reconocida, a la que pertenezca el trabajador por razón de su oficio o profesión, suspenden el preaviso dispuesto con anterioridad, el que deberá otorgarse nuevamente cuando el trabajador estuviere en condiciones de reintegrarse a sus tareas.»

El fundamento de esta modificación que propongo a la comisión es precisar, en primer lugar,

en casos de huelga a qué trabajadores comprende, y luego, algo mucho más importante y que constituye el meollo, por así llamarlo, del artículo: el efecto de la suspensión del preaviso con motivo de las circunstancias que se enuncian en la primera parte del artículo.

Del texto, tal como está redactado por la comisión, parecería surgir que la suspensión significa, más o menos, lo siguiente. Un trabajador que está gozando del preaviso y que en determinado momento, por ejemplo, contrae una enfermedad, reintegrándose al trabajo a los pocos días ya repuesto de esa enfermedad, seguiría gozando del preaviso ya otorgado, lo cual significa en los hechos, lisa y llanamente, que no goza del preaviso como lo establece la ley, que, según la antigüedad del trabajador, debe ser de uno o de dos meses.

Si en el lapso en que está gozando del preaviso el trabajador se enferma o es suspendido, o se da el hecho de una huelga, es evidente que el trabajador se ve impedido, por esas razones, de continuar gozando del preaviso, es decir, de disponer de las tres horas diarias que le acuerda la ley para buscar otra tarea u ocupación.

La redacción que propongo tiende a aclarar debidamente que en los casos en que se suspende el preaviso por alguna de las tres razones que se enuncian el empleador deberá otorgar nuevamente el preaviso, o sea, que el trabajador empezará un nuevo período de preaviso. Hago especial hincapié porque éste ha sido hasta el presente el sentido o la interpretación que se ha dado al instituto del preaviso en las circunstancias que apunto. Nuestra jurisprudencia ha sido casi unánime en todo el país en esta materia. Por ello, encuentro suficientemente abonada mi proposición y solicito que la comisión la tenga presente a efectos de considerar viable la inclusión del nuevo texto que sugiero.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Evidentemente, la redacción del artículo es confusa y va a traer aparejadas complicaciones en su aplicación. Estoy más de acuerdo con el texto propuesto por el señor diputado Riso, pero creo que se puede simplificar más aún redactándolo en la siguiente forma: «Los accidentes y las enfermedades inculpables dejan sin efecto el período de preaviso notificado con anterioridad.» Quiero decir que el empleador estará obligado a notificar al trabajador un nuevo preaviso. Creo que ésta es la redacción correcta y simple para este artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Garófalo.

Sr. Garófalo. — Señor presidente: la institución del preaviso tiene por objeto fundamental facilitar que el preavisado tenga el tiempo disponible para conseguir un nuevo trabajo u ocupación.

De conformidad con la proposición del señor diputado Riso, suponiendo un preaviso por el

término de treinta días, si a los veintiocho días el trabajador se enferma habría que volver a otorgarle otro preaviso de treinta días, lo cual sería irritante, porque si en los veintiocho días no consiguió trabajo, por dos días solamente, se le pueden ampliar esos dos días, como dice el artículo, pero no concederle nuevamente treinta días.

En el caso de huelga es irrito incluirlo, porque durante la huelga puede ir a buscar trabajo igualmente, porque tiene, en lugar de las tres horas de preaviso, todo el día de tiempo. Quiere decir que no hace falta que se incluya esto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: la comisión va a mantener su despacho, por las razones que daré seguidamente.

Hemos dicho con anterioridad que la huelga no tiene efecto alguno sobre la relación del contrato individual de trabajo. Entonces, entendemos que es improcedente incluirla como causal de suspensión del preaviso. En cuanto a la otra proposición, entendemos que significaría aumentar el plazo del preaviso, y ése no es el criterio de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Riso.

Sr. Riso. — Señor presidente: a propósito de las últimas palabras del señor diputado Pena, entiendo que si la ley quiere que el plazo tenga un término fijo, debió haber dicho no un mes —que se entiende en la generalidad de los casos como un mes calendario—, sino treinta días. En ese caso, hubiera sido consecuente con lo que se pretende sostener en el despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 46 del despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa de 70 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 47.

Tiene la palabra el señor diputado Stainoh.

Sr. Stainoh. — Señor presidente: el capítulo VII, que comprende desde el artículo 47 al 55, es de disposiciones generales e incluye algunas obligaciones del empleador; el capítulo VIII, interpretación, trae normas para el entendimiento de la ley.

Solamente anhelo formular una pregunta al señor miembro informante de la comisión, en razón de que las opiniones vertidas por un parlamentario en el recinto, son simples expresiones individuales, pero aquellas emanadas del miembro informante de la comisión encargada del estudio, constituyen una fuente propia de interpretación de la ley. Aun ante el silencio del proyecto al respecto, quisiera inquirir si es exacto y entendido que, pese a que no se lo incluye en su texto por razones de buena técnica legislativa, el empleador que no depositare los apor-

tes que retenga a su personal dentro de un plazo rápido, estará incurso en el delito de defraudación.

Del salario que obla el empleador por el contrato laboral, según memorizo, retiene la parte jubilatoria, el porcentual para la Caja de Compensaciones, ley 15.223, para Medicina Social sobre el aguinaldo, según decreto ley 33.302, en sus casos para la Caja de Maternidad; ley 11.933, para la Caja de Ahorro para Menores y alguna otra retención.

Por el artículo 173, inciso 2º, del Código Penal, la retención indebida está penada con un mes a seis años de prisión. Interpreto que quien recibe dinero mediante un título que produce la obligación de entregar al no depositarlo ipso facto en la caja que corresponda, consuma el delito de abuso de confianza en la figura penal, ejercita una acción dolosa conectada con una situación jurídica lícita preexistente, allí intervierte el título en lesión y detrimento del trabajador beneficiario. Su mora debe ser *ex lege*. El instante consumativo del delito es el del hecho engañoso a la víctima.

La interpretación legal en materia laboral es igualar las condiciones en la lucha por el derecho, atenuar el rigor del humilde que sufre con su economía más débil. La ley puede interpretarse: en el medio legislativo cuando se trata de aclarar un concepto, aunque omitido en su texto, y no diferirlo a lo judicial, que la entenderá en la sentencia, o en lo doctrinario, el jurisconsulto, en su forja de intelectualidad.

Las leyes tienen texto claro, tienen un texto dudoso, o son sin texto, como en este caso, sin que la critique, pues comprendo que, por razones de buena técnica, estas normas cuadren en un estatuto más general.

Hay una interpretación de la ley lógica, por el razonamiento; y otra gramatical. En la primera, se examina la relación con otras disposiciones similares para que el precepto responda a una idea general, se investiga la *ratio legis*, la opinión de sus redactores para comprenderla, y aun ha de estimarse la apreciación de sus consecuencias para que no sea oblicua, y para que no contradiga el concepto general al que responden estas leyes de protección de los trabajadores de nuestra patria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo del 14 de marzo de 1899, tomo 77, página 319, se refirió al valor de la opinión individual de los parlamentarios. En otros fallos, del 4 de julio de 1911, tomo CXIV, página 298, y ulteriores de 1918 y 1924, así como en un plenario de las cámaras civiles, del 8 de mayo de 1922, se asentó que las explicaciones o las aclaraciones de los miembros informantes en el recinto, son la fuente propia de la interpretación de la ley.

Sr. Natiello. — El señor diputado está fuera de la cuestión en debate, señor presidente.

Sr. Stainoh. — Ruego al señor miembro informante de la comisión quiera tener la amabilidad, pese al silencio de la ley, que acaecerá por razones de técnica legislativa y que evita enancar en su cuerpo una idea más general, de expresar si la Comisión de Legislación del Trabajo interpreta que quien retiene parte del salario de cualquier dador laboral, desviándolo de su recto destino, no es un deudor moroso, sino que está incurso en el delito de defraudación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se está tratando el artículo 47, señor diputado.

La Presidencia no sabía dónde iba dirigida la exposición del señor diputado Stainoh, pero advierte que en el planteo concreto que hace no hay relación con el artículo 47.

Sr. Natiello. — Señor presidente: el único que está siempre fuera de la cuestión soy yo, pero en el caso del señor diputado preopinante no se dio cuenta rápidamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia acepta el cargo entendiendo que es una amabilidad del señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Comparto el criterio de la Presidencia. Creo que la preocupación del señor diputado Stainoh no se encuentra vinculada con el despacho que considera la Cámara, pero al solo efecto de satisfacer su preocupación diré —a título personal, por supuesto— que interpreto que el empleador que no depositara los aportes jubilatorios retenidos al personal incurre en el delito de defraudación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se formulan observaciones al artículo 47, se dará por aprobado.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 48.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 49.

La comisión ha propuesto un agregado que se enunciará por Secretaría.

Sr. Secretario (Oliver). — La comisión propone como último párrafo del artículo el siguiente: «Al finalizar cada período o temporada, el empleador deberá otorgar al trabajador las vacaciones y abonarle el sueldo anual complementario correspondiente.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 49 con el agregado propuesto por la comisión.

—Resulta afirmativa de 89 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 50.

Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Es para proponer la inclusión de un artículo nuevo referido a la obligación del empleador de entregar un certificado de trabajo.

Quiero hacer notar que la propuesta que formulo es parte del proyecto presentado por el señor diputado Bogliano, que creo perfeccionaría la ley.

Sr. Pena. — Si me permite el señor diputado...

La comisión va a proponer a continuación del artículo 50 la inclusión de dos nuevos artículos, uno de los cuales se refiere expresamente al certificado de trabajo, que por error se omitió en el despacho.

Sr. Monte. — De todas maneras voy a aprovechar que estoy en el uso de la palabra y, en el afán de ahorrar tiempo, voy a enunciar mi propuesta.

Dice así: «En caso de cesantía o retiro voluntario del servicio por cualquier causa el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones sobre su naturaleza, la antigüedad y rango de las funciones desempeñadas.»

Teniendo en cuenta lo expresado por el señor diputado Pena, me allano a que se considere el artículo que proponemos en el momento que lo considere oportuno la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se hacen observaciones al artículo 50, se lo tendrá por aprobado.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se leerán los dos artículos nuevos que propone la comisión y que irían a continuación del artículo 50.

Sr. Secretario (Oliver). — El primero sería el siguiente: «En todos los casos de extinción del contrato de trabajo, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado en el que se hará constar las fechas de ingreso y egreso, la naturaleza de las tareas desempeñadas y su número de inscripción en la caja nacional de previsión social respectiva. También certificará haber efectuado el pago de los aportes jubilatorios y de todo otro del que sea agente de retención.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo nuevo propuesto por la comisión.

Tiene la palabra el señor diputado Monte.

Sr. Monte. — Es solamente para dejar constancia de que me satisface la propuesta formulada por la comisión y que, en consecuencia, mi bloque va a votarla favorablemente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo nuevo propuesto por la comisión, que iría a continuación del 50.

—Resulta afirmativa de 93 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura del segundo artículo nuevo propuesto por la comisión, que se incluiría a continuación del que acaba de votar la Honorable Cámara.

Sr. Secretario (Oliver). — Su texto es el siguiente: «Para hacer frente al pago de las indemnizaciones por despido, el empleador podrá constituir una reserva deducible a los efectos del impuesto a los réditos, ingresando a ella a su opción los importes que resulten de cualquiera de los siguientes sistemas: 1º El importe resultante de aplicar, sobre los salarios abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo, el por ciento que representen, en los tres últimos ejercicios, las indemnizaciones reales pagadas sobre los salarios totales abonados; 2º Un por ciento a fijar por el Poder Ejecutivo nacional a aplicar sobre los salarios totales abonados durante el ejercicio al personal en actividad al cierre del mismo.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo nuevo que acaba de leerse por Secretaría, que iría a continuación del 50 bis.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 105 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 51.

Tiene la palabra el señor diputado Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: el trabajador vuelca su dignidad en el trabajo. El salario es la retribución de su labor. Por ello creo que nada puede haber más sagrado que el pago del salario y que no puede haber ningún privilegio superior al que tiene el trabajador para el cobro de sus compensaciones.

Esto ha sido reconocido hace siglos. He leído una obra de un autor quizás conocido por los especialistas del derecho civil, me refiero a Bourjon, primer autor de un comentario sobre la norma del Código Civil francés, análoga a la del artículo 2.412 de nuestro código, y que se refiere a «la posesión que vale título». Bourjon invoca la jurisprudencia del prestigioso tribunal del Chatelet, de París, que señaló en reiteradas oportunidades que en el caso de que una cosa mueble entregada a un artesano para su reparación fuera transferida por éste a un tercero (adquirente de buena fe), se podía reivindicar la cosa, pero debía abonársele el salario al artesano que la transfirió indebidamente. Es decir que se reconocía por este prestigioso tribunal de Chatelet el carácter sagrado del salario pese al delito cometido por el artesano, para quien existían las penas correspondientes.

Actualmente, la efectivización de los créditos de los empleados y obreros en caso de falencia del empleador, es irrealizable. Todos sabemos el privilegio que tienen los acreedores de la masa. Los acreedores, por otra parte, empleados y obreros del fallido tienen un privilegio gene-

ral por los seis meses anteriores a la declaración de la quiebra conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la ley 11.719 (artículo 1507 del Código de Comercio).

Malagarriga en su *Tratado elemental de derecho comercial*, en una nota ilustrativa, tomo IV, bajo el número 221, nos dice: «Decisiones judiciales han establecido sobre el privilegio al que nos referimos, que la indemnización por despido no tiene privilegio general si el empleado obtuvo verificación de seis meses o más de salarios impagos con el privilegio del artículo 129, inciso tercero, ley 11.719 (Cámara Comercial, 29 de febrero de 1936, «La Ley», tomo I, página 395); que la limitación de los seis meses no se aplica a las indemnizaciones por despido y falta de preaviso (Cámara Comercial, 14 de abril de 1939, «La Ley», tomo XIV, página 772); que la verificación del crédito por salarios en la quiebra del deudor con el privilegio del artículo 129, inciso tercero, ley 11.719, hace cosa juzgada e impide reclamar en la ejecución prendaria el pago preferente con relación al privilegio especial del ejecutante (Cámara Comercial, 5 de septiembre de 1939, «La Ley», tomo XV, página 1112).

No voy a seguir citando casos de jurisprudencia que son bien conocidos de todos, especialmente de los abogados. Sabemos que los sueldos de los empleados y obreros en caso de falencia del empleador no se cobran, son totalmente ilusorios. No conozco ningún caso en que los acreedores empleados y obreros hayan podido hacer alguna vez efectivo el privilegio general de que nos habla el artículo 129 de la ley 11.719.

Por ello, basado en los antecedentes que he señalado brevemente, voy a proponer una modificación al artículo 51. Se me dirá quizás que lo que propugno podrá revolucionar esta materia de los privilegios o que habrá que modificar los textos que nos han enseñado otra cosa. Pero yo creo que en esta hora debemos tomar actitudes claras, categóricas, en defensa de los económicamente débiles, no con palabras sino con hechos.

Yo no vine a esta Cámara a defender intereses de los privilegiados. He venido, como radical y como ciudadano, a defender principalmente los intereses de los económicamente débiles, de los trabajadores, de los que están construyendo en forma efectiva la grandeza nacional.

Por eso propongo que el artículo 51 quede redactado así: «Los créditos del trabajador provenientes de obligaciones emergentes del contrato de trabajo gozarán de privilegio sobre los bienes del empleador y tendrán preferencia a todo otro crédito.» Hasta aquí tal como está redactado en el despacho, pero nada más. Yo propongo la supresión de todo lo que viene a continuación y agrego: «...y por el término

de la prescripción que se dispone en el artículo siguiente».

Señor presidente: antes que el privilegio de los acreedores hipotecarios, que son personas a las que les sobra el dinero porque lo colocan con grandes garantías, cual es la hipotecaria, y a intereses usurarios generalmente; antes que los créditos prendarios; antes que los créditos alimentarios del empleador y que los gastos y honorarios necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del deudor en caso de falencia del empleador, esto es antes que los gastos causídicos están los salarios y sueldos de los trabajadores. Por ello, siendo leal con mi conciencia y con la sensibilidad que ya he proclamado en otra ocasión desde esta banca propongo la referida modificación que espero sea aceptada por la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: el artículo 51 que estamos considerando recoge un proyecto presentado por el señor diputado Pizarro, del bloque de la democracia cristiana, destinado a resguardar los créditos del trabajador provenientes de obligaciones emergentes del contrato de trabajo.

Ahora el señor diputado Fernández propone una modificación que merece ser mirada con simpatía en cuanto busca acentuar esa protección.

La propuesta del señor diputado Fernández aparece aparentemente como justa, casi diría romántica, pero equívocamente revolucionaria, porque constituye una de esas propuestas que a fuerza de extremar la protección se transforma en un *boomerang* contra los propios intereses del trabajador.

Por esta vía vamos a crear un elemento que va a afectar como ninguno de manera grave las fuentes de trabajo de los obreros y trabajadores. Estableciendo el privilegio que el señor diputado Fernández propicia, ningún empresario va a poder obtener créditos para el desenvolvimiento de su empresa, porque en la seguridad de que los créditos del trabajador estarán por encima de los hipotecarios y prendarios no habrá garantía cierta para ningún crédito que el empresario solicite para la mayor y mejor evolución de su empresa.

Véase, pues, que una proposición aparentemente justa se transformaría en una medida altamente perjudicial, en primer lugar para los propios trabajadores, y en segundo término, para toda la economía nacional.

Además, esta proposición que el señor diputado Fernández hace importa una modificación —demasiado substancial como para hacerla a través de esta ley— de la ley de quiebras, del estatuto de los viajantes, de una cantidad de disposiciones dispersas, de los trabajadores de casas de renta, de los periodistas, etcétera.

Creo que si la Cámara se deja llevar por la aparente justicia que encerraría la proposición del señor diputado Fernández habríamos dado un gravísimo paso en perjuicio de los trabajadores, que en corto término sufrirían las consecuencias de esta sanción.

Por ello nos oponemos rotunda y decididamente a esta proposición, en la seguridad de que defendemos con buen criterio y con profundos anhelos de justicia los intereses de los trabajadores. Pedimos, pues, que se mantenga el actual texto del artículo 51.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — No obstante las razones dadas por el señor diputado Vedia, la bancada del socialismo argentino va a apoyar la proposición del señor diputado Fernández.

Consideramos que el derecho del trabajo es un derecho de excepción, es un derecho que está en formación y que va avanzando contra los cánones del derecho clásico. En este sentido se debe tener en cuenta que la única fuente de recursos del trabajador es su propio salario, por lo que debe tener privilegio por sobre todos los demás créditos.

Por lo tanto, vamos a votar favorablemente la propuesta del señor diputado Fernández.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Natiello.

Sr. Natiello. — La bancada justicialista va a adherir a la proposición del señor diputado Fernández.

No va a ocurrir ninguna debacle, ninguna catástrofe, porque se sitúa a los salarios de los trabajadores, a los créditos emergentes del trabajo en un sitio de privilegio frente a estos créditos que, como bien ha dicho el señor diputado Fernández, suelen tener por lo menos una intención usuraria.

En consecuencia, adherimos calurosamente a esa moción en la inteligencia de que estamos, de acuerdo con la doctrina justicialista que pone por encima de todos los valores el supremo valor del trabajo humano, en una posición coherente con nuestra propia doctrina.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Garófalo.

Sr. Garófalo. — Abonando lo que con mucho ingenio y acierto dijo el señor diputado Vedia, aunque con él sólo estamos de acuerdo por excepción (*Risas*), quiero significar que son miles las industrias y comercios que subsisten porque obtienen créditos hipotecarios y prendarios, los que pueden lograr en virtud del privilegio actual que les asigna la ley.

Suprimido este privilegio e incluidos otros, sucederían dos cosas: primero, que no se podrían conseguir créditos, y segundo, que los intereses aumentarían porque el riesgo es mayor.

Quiere decir que en lugar de ser beneficioso para los obreros, el privilegio preferente para cobrar va a ser contraproducente, como bien decía el señor diputado Vedia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — No he alcanzado a percibir las expresiones del señor diputado Garófalo que han motivado un comentario risueño de la Cámara, pero no está de más que pongamos un poco de color en este debate que se va prolongando.

De cualquier manera, quiero significar que aquí no está en juego la razón que justifique que se conceda un privilegio a los trabajadores por los salarios e indemnizaciones que les corresponde como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo.

La razón existe, y se trata de darle la protección que le corresponde. Pero todo está articulado en un sistema general de leyes que prevé una serie de mecanismos para que esos créditos puedan hacerse efectivos, a fin de que los trabajadores puedan en definitiva cobrar.

De acuerdo con la legislación vigente, en una quiebra existen, por lo pronto, acreedores de la masa que tienen privilegio por sobre los demás, que son las retribuciones de todos aquellos funcionarios, letrados, contadores, peritos y demás, que permiten que el expediente pueda tramitarse y llegar a buen fin. Por eso se da un privilegio en la legislación argentina y en todas las legislaciones del mundo, incluso en las más avanzadas y perfectas donde los trabajadores están más protegidos.

Además, existen acreedores de dominio. ¿Cómo no se les va a reconocer su privilegio, si un acreedor de dominio no hace sino rescatar lo que le pertenece? ¿También esto lo vamos a suprimir? ¿Le vamos a quitar a los demás lo que les corresponde?

Existen también acreedores con privilegios especiales. Existen los que han gastado para conservar la cosa, para que el patrimonio del deudor exista. ¿También les vamos a negar el derecho de percibir sus créditos?

Yo no tengo interés en proteger a los ricos; lo que quiero es que hagamos leyes que tengan un cierto sentido jurídico y que expresen la responsabilidad de la Cámara. No va a haber catástrofe, como dijo muy bien el señor diputado Natiello, que esta vez no nos ha endilgado su elocuencia, que reconozco, su talento que me complace también en destacar, ni trajo al debate a Nietzsche, a Napoleón y los dioses del Olimpo. . . (*Risas*.) Pero lo cierto es que con este tipo de leyes y de sanciones vamos a crear un verdadero caos jurídico. Nadie sabrá a qué atenerse: y yo aseguro a los señores diputados que al final, después de muchas vueltas, los privilegios que existían en la ley se van a reconocer, porque nacen de la naturaleza de las cosas, porque no pueden dejar de existir, porque no han sido inventados para perjudicar a los obreros, sino que son consecuencia de la justicia que los sustenta y de una larga experiencia. La ley de quiebras que nos rige no es un invento argentino;

ral por los seis meses anteriores a la declaración de la quiebra conforme a lo dispuesto en el artículo 129 de la ley 11.719 (artículo 1507 del Código de Comercio).

Malagarriga en su *Tratado elemental de derecho comercial*, en una nota ilustrativa, tomo IV, bajo el número 221, nos dice: «Decisiones judiciales han establecido sobre el privilegio al que nos referimos, que la indemnización por despido no tiene privilegio general si el empleado obtuvo verificación de seis meses o más de salarios impagos con el privilegio del artículo 129, inciso tercero, ley 11.719 (Cámara Comercial, 29 de febrero de 1936, «La Ley», tomo I, página 395); que la limitación de los seis meses no se aplica a las indemnizaciones por despido y falta de preaviso (Cámara Comercial, 14 de abril de 1939, «La Ley», tomo XIV, página 772); que la verificación del crédito por salarios en la quiebra del deudor con el privilegio del artículo 129, inciso tercero, ley 11.719, hace cosa juzgada e impide reclamar en la ejecución prendaria el pago preferente con relación al privilegio especial del ejecutante (Cámara Comercial, 5 de septiembre de 1939, «La Ley», tomo XV, página 1112).

No voy a seguir citando casos de jurisprudencia que son bien conocidos de todos, especialmente de los abogados. Sabemos que los sueldos de los empleados y obreros en caso de falencia del empleador no se cobran, son totalmente ilusorios. No conozco ningún caso en que los acreedores empleados y obreros hayan podido hacer alguna vez efectivo el privilegio general de que nos habla el artículo 129 de la ley 11.719.

Por ello, basado en los antecedentes que he señalado brevemente, voy a proponer una modificación al artículo 51. Se me dirá quizás que lo que propugno podrá revolucionar esta materia de los privilegios o que habrá que modificar los textos que nos han enseñado otra cosa. Pero yo creo que en esta hora debemos tomar actitudes claras, categóricas, en defensa de los económicamente débiles, no con palabras sino con hechos.

Yo no vine a esta Cámara a defender intereses de los privilegiados. He venido, como radical y como ciudadano, a defender principalmente los intereses de los económicamente débiles, de los trabajadores, de los que están construyendo en forma efectiva la grandeza nacional.

Por eso propongo que el artículo 51 quede redactado así: «Los créditos del trabajador provenientes de obligaciones emergentes del contrato de trabajo gozarán de privilegio sobre los bienes del empleador y tendrán preferencia a todo otro crédito.» Hasta aquí tal como está redactado en el despacho, pero nada más. Yo propongo la supresión de todo lo que viene a continuación y agregó: «...y por el término

de la prescripción que se dispone en el artículo siguiente».

Señor presidente: antes que el privilegio de los acreedores hipotecarios, que son personas a las que les sobra el dinero porque lo colocan con grandes garantías, cual es la hipotecaria, y a intereses usurarios generalmente; antes que los créditos prendarios; antes que los créditos alimentarios del empleador y que los gastos y honorarios necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del deudor en caso de falencia del empleador, esto es antes que los gastos causídicos están los salarios y sueldos de los trabajadores. Por ello, siendo leal con mi conciencia y con la sensibilidad que ya he proclamado en otra ocasión desde esta banca propongo la referida modificación que espero sea aceptada por la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Vedia.

Sr. Vedia. — Señor presidente: el artículo 51 que estamos considerando recoge un proyecto presentado por el señor diputado Pizarro, del bloque de la democracia cristiana, destinado a resguardar los créditos del trabajador provenientes de obligaciones emergentes del contrato de trabajo.

Ahora el señor diputado Fernández propone una modificación que merece ser mirada con simpatía en cuanto busca acentuar esa protección.

La propuesta del señor diputado Fernández aparece aparentemente como justa, casi diría romántica, pero equívocamente revolucionaria, porque constituye una de esas propuestas que a fuerza de extremar la protección se transforma en un *boomerang* contra los propios intereses del trabajador.

Por esta vía vamos a crear un elemento que va a afectar como ninguno de manera grave las fuentes de trabajo de los obreros y trabajadores. Estableciendo el privilegio que el señor diputado Fernández propicia, ningún empresario va a poder obtener créditos para el desenvolvimiento de su empresa, porque en la seguridad de que los créditos del trabajador estarán por encima de los hipotecarios y prendarios no habrá garantía cierta para ningún crédito que el empresario solicite para la mayor y mejor evolución de su empresa.

Véase, pues, que una proposición aparentemente justa se transformaría en una medida altamente perjudicial, en primer lugar para los propios trabajadores, y en segundo término, para toda la economía nacional.

Además, esta proposición que el señor diputado Fernández hace importa una modificación —demasiado substancial como para hacerla a través de esta ley— de la ley de quiebras, del estatuto de los viajantes, de una cantidad de disposiciones dispersas, de los trabajadores de casas de renta, de los periodistas, etcétera.

ninguna duda al respecto, agregar expresamente, después de las palabras «contrato de trabajo», la frase «inclusive las de indemnización por accidentes y enfermedades profesionales», porque estas acciones tienen un término de prescripción breve, más breve, por cierto, que el establecido en el artículo 52 proyectado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión acepta el agregado propuesto por el señor diputado González Bergez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega al señor diputado González Bergez que haga llegar a la mesa el agregado que propone, o que lo enuncie nuevamente.

Sr. González Bergez. — El agregado, que iría después de la expresión «todas las acciones emergentes del contrato de trabajo», es el siguiente: «inclusive las de indemnización por accidentes y enfermedades profesionales.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 52 con el agregado propuesto por el señor diputado González Bergez y aceptado por la comisión.

— Resulta afirmativa de 91 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 53.

Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Este artículo introduce una presunción que significa invertir la carga de la prueba en materia de contrato de trabajo lo que, en principio, parece razonable. Suele resultar difícil a los trabajadores la prueba del despido y normalmente se acude al telegrama de intimación que, si no es respondido, no crea ninguna prueba ni siquiera ninguna presunción por imperio de una conocida norma del Código Civil.

Está bien que se incluya, entonces, una norma como ésta, que obligue al patrono a definir la situación, pero me parece que como está redactado el artículo es susceptible de dos objeciones que, de salvarse, creo que se mejoraría y quedaría casi perfecto.

Por un lado se dice que la presunción a que se refiere —la de veracidad— se creará cuando el telegrama del trabajador no fuese contestado en el plazo razonable fijado en la propia intimación telegráfica. Esto puede dar lugar a dificultades. ¿Qué es plazo razonable? Sería prudente agregar, después de las palabras «el plazo razonable fijado en ellas», algo así como esto: «que no será inferior a tres días», o «que no será inferior a cinco días», como pareciera más conveniente.

La segunda observación consiste en lo siguiente. Si está bien que el silencio ante una intimación telegráfica dirigida por el trabajador al empleador sobre una determinada si-

tuación creada produzca determinadas consecuencias jurídicas —el crear una presunción, en este caso—, ello deriva de que entre el trabajador y su empleador hay una relación directa de derecho. Se han creado unas relaciones en el curso de las cuales es lógico y admisible que la intimación o la interrogación dirigida por una de las partes a la otra produzca, frente al silencio del interrogado o del intimado, determinadas consecuencias. Pero aquí se extienden esas consecuencias a la intimación dirigida al empleador por la organización sindical de la actividad del trabajador, con la cual no existe por parte de aquél una relación de derecho directa que pudiese dar paso a semejante interpretación o presunción. Parece lógico, sí, que la organización sindical pueda dirigir intimaciones de este tipo al empleador cuando éste se aparta de las cláusulas de un contrato colectivo en el cual, por cierto, la organización sindical es parte como que lo ha concertado y debe velar por el cumplimiento de sus cláusulas, teniendo derecho de hacer exigencias incluso en justicia. Pero no tienen validez los mismos argumentos cuando se trata de la relación individual entre el empleador y el trabajador.

Hago notar, por otra parte, que podría darse lugar por una cláusula de este tipo a una verdadera batalla de telegramas entre una organización sindical y un empleador. Eso no puede ocurrir cuando un trabajador, que seguramente cuando envía un telegrama, normalmente colacionado, reclamando una definición a su empleador, lo hace sobre la base de un hecho concreto, real, que generalmente le consta y que inclusive lo determina a enviar el telegrama, que supone una actividad y un gasto. Pero la organización sindical se encuentra en condiciones económicas de afrontar una batalla de telegramas y no se compromete.

Quiere decir que estaría abriéndose así la puerta a un tercero en la relación contractual, que podría asumir su papel en la batalla de telegramas, sin riesgo ni consecuencia alguna.

Sr. Risso. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. González Bergez. — Con mucho gusto, señor diputado.

Sr. Risso. — Deseo aclarar el concepto acerca de la inclusión de «la organización sindical». Esta disposición está dirigida hacia aquellos casos en que la organización sindical actúa como representante nato del obrero. Es decir, que no interviene como organización per se, sino en defensa de los intereses obreros en juego; no desplaza al obrero sino que lo reemplaza, integrando su personalidad, en aquellos casos en que el obrero no puede ejercitar sus derechos. Este es el sentido de la inclusión de esta disposición.

Sr. González Bergez. — Lo entiendo perfectamente, señor diputado, y no me parecería mal,

inclusive, esta gestión de negocios que realizaría la organización sindical en defensa de los intereses del trabajador, aunque, claro está, podría existir colisión en determinados casos entre la posición sostenida por el trabajador y la sostenida por la organización sindical. La hipótesis no es descartable, podría darse. De todas maneras, me parece que el trabajador es el que está mejor habilitado para defender su derecho. Ha de contar siempre, sin duda alguna, con el asesoramiento, el apoyo, la guía y la orientación de la organización sindical. Pero dar a la organización sindical personalidad propia para que per se, como titular de un derecho, entable este tipo de gestiones o haga este tipo de intimaciones, me parece que es salirse del cuadro de relaciones normales del derecho, cosa que inclusive puede ser peligrosa.

En síntesis, señor presidente, mi proposición consiste en suprimir las palabras «o la organización sindical de su actividad», por un lado, y por otro agregar, luego de las palabras «cuando no fueren contestadas en el plazo razonable fijado en ellas», la expresión «que no será inferior a tres días».

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión aceptará la observación formulada por el señor diputado González Bergez respecto de la necesidad del agregado de la expresión «que no será inferior a tres días», pero no así lo relativo a la supresión de las palabras «o la organización sindical de su actividad», por las razones que ya ha dado el señor diputado Risso y por entender que la asociación gremial protege tanto los intereses particulares como colectivos de los trabajadores.

Sr. Hardoy. — Los tres días deberían calificarse como hábiles, para evitar que parte o la totalidad del plazo coincida con feriados.

Sr. Pena. — De acuerdo, señor diputado. Tres días hábiles.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 53 con el agregado propuesto por el señor diputado González Bergez y aceptado por la comisión, con la aclaración de que se trata de días hábiles.

— Resulta afirmativa de 87 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 54.

Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez Vagaría.

Sr. Rodríguez Vagaría. — En la forma que este artículo está redactado, impone a la justicia provincial la obligación de la gratuidad en el servicio que proporciona a los trabajadores en los casos de conflictos emergentes de esta ley. Estoy totalmente de acuerdo en cuanto al beneficio de la gratuidad y, según es mi conocimiento, no existe ninguna provincia que en

sus leyes de procedimiento laboral imponga el pago de tasas a los trabajadores.

Pero entiendo que esa disposición no puede surgir de una ley nacional, porque es potestad exclusiva de las provincias el imponer o no una tasa onerosa por sus servicios judiciales. La tasa de justicia a través del pago del sellado es la retribución a un servicio que paga quien lo recibe. El artículo 5º de la Constitución impone a las provincias —las que no han delegado en la Nación la administración de justicia— la obligación de mantenerla y hacerla efectiva. Bajo esas condiciones, junto con otras, la Nación garantiza a cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones.

Es decir, señor presidente, que se trata de una facultad no delegada por las provincias a la Nación. Por esto, y haciendo a la esencia de la administración de justicia lo referido a la gratuidad u onerosidad del servicio, entiendo que en una ley nacional no se puede incluir una disposición de esta naturaleza.

Afortunadamente en todas las provincias argentinas el servicio gratuito de justicia en esta materia ha sido reconocido; pero en defensa de ese principio federalista que es indeclinable por las provincias sostengo que cualquier disposición de este tipo que quiera imponer una obligación determinada a las mismas es de carácter inconstitucional. En ese sentido dejo sentada mi posición.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rouzaut.

Sr. Rouzaut. — Entiendo que el artículo 54, como está redactado, es perfectamente constitucional. Tal disposición no hace otra cosa que establecer una pobreza legal del empleado u obrero que ha de defender sus derechos en la faz administrativa o judicial.

Esta disposición no es sino la repetición de normas análogas que contiene la ley de accidentes del trabajo, la que al regular estas cuestiones jurídicas ha establecido igualmente que la gratuidad hace a la defensa misma de los derechos que la ley consagra.

Por tal circunstancia, cuando la Constitución ha facultado al Congreso Nacional a dictar esta clase de leyes, también le ha acordado la de resolver todos los problemas inherentes a la defensa de los derechos en todas las fases en que el empleado deba intervenir.

Por estas consideraciones creo que el artículo 54 no viola ninguna disposición de la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez Vagaría, para una segunda intervención de cinco minutos.

Sr. Rodríguez Vagaría. — Con todo el respeto que me merece la opinión del señor diputado Rouzaut, insisto en mi creencia anterior.

Sostengo que la gratuidad hace a la esencia de los derechos sociales que aquí se invocan; ellos existen y deberán ser reconocidos por la justicia de las provincias en su momento.

Si la gratuidad hace a la esencia y posibilita que el trabajador pueda defender sus derechos ante la justicia solo mediante el sistema de gratuidad, será en razón de esos derechos sociales acordados por estas leyes que son de orden público que nacen de la Constitución como inherentes a la naturaleza del hombre, pero no porque la ley misma lo establezca. Será porque nace de la esencia misma del derecho tutelado en la ley su ejercicio en forma gratuita, y de ahí la obligación y responsabilidad de las provincias. Si algunas de ellas vulnerara este principio, si en algún supuesto impidieran al trabajador la defensa de sus derechos o solo se lo permitieran a título oneroso, se habrá dado una de las circunstancias que la Constitución contempla en su artículo 5º para decretar la intervención federal a esa provincia porque de esa manera no se está asegurando el principio de la administración de justicia que la Constitución impone.

De modo, pues, que sostengo que la obligación de imponer la gratuidad deriva de facultades inherentes a cada provincia, pues ellas deben asegurar el régimen de justicia que la Constitución les impone; pero de ninguna manera puede ser el Congreso de la Nación quien la establezca.

El hecho de que la ley de accidentes del trabajo y algunas otras leyes reglen procedimientos y formas judiciales para las provincias, podría constituir un antecedente, pero la validez y la certeza de ese antecedente es algo que puede y debe discutirse y que de ninguna manera, puede crear un mal precedente que tengamos obligación de seguir.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Nuestro sector va a votar en favor del dictamen. Nos sentimos adecuadamente interpretados por las manifestaciones del señor diputado Rouzaut, y solamente haré un brevisimo argumento final que a nuestro juicio parece decisivo. Si fuera cierto que la gratuidad no corresponde a la esencia misma del derecho laboral que estamos tratando de proteger, tampoco habría que acordarlo en la Capital Federal, porque implicaría crear una desigualdad odiosa respecto del principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución. Si se lo vulnera en este caso es porque hay un derecho superior al de la igualdad, que tratamos de resguardar y proteger. E incluso, entiendo que el señor diputado preopinante está de acuerdo en que así se haga en la Capital Federal, precisamente porque hace a la esencia del derecho; y si hace a la esencia del derecho debe ser válido para todo el país.

Sr. Rodríguez Vagaría. — Es posible en la Capital Federal porque el Congreso, como Legislatura local, puede tratar esta materia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pizarro.

Sr. Pizarro. — Entiendo que este artículo está bien y debe mantenerse. Oportunamente votaremos a favor. La gratuidad que la ley consagra, empero, no tiene nada que ver con la forma o el procedimiento que es materia de legislación de las provincias. Aquí no está en juego, ni puede estarlo, el artículo 5º de la Constitución. Si alguna norma podría invocarse para tratar de apuntalar la débil argumentación del señor diputado impugnante, sería el artículo 104 de la Constitución Nacional.

Entendemos que esta ley tiene otros antecedentes muy buenos y que es indispensable asegurar la gratuidad por esta vía, aunque todas las leyes provinciales en materia de procedimiento laboral hayan establecido el mismo principio.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Garófalo.

Sr. Garófalo. — Desearía que la comisión diera respuesta al siguiente interrogante: si un trabajador promueve una acción judicial en virtud de la gratuidad y es vencido, o sea que pierde la acción, pregunto ¿quién pagará los honorarios de los peritos y de los abogados que intervinieron en el juicio?

Sr. Luco. — Lo dice el artículo, señor diputado, que no lo exime del pago sino de prestar cauciones, a menos que sean simplemente juratorias.

Sr. Garófalo. — ¿Pero lo pagan por orden causado o según sentencia judicial?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Herrera.

Sr. Herrera. — El problema que plantea el señor diputado Garófalo está perfectamente resuelto en todos los códigos de procedimientos. Incluso, en algunos se establece que si el obrero es vencido pagará si cambiara de fortuna, es decir, si mejorara su posición económica actual. El problema de las costas judiciales no tiene nada que ver con la ley de contrato de trabajo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Frega.

Sr. Frega. — El problema que ha planteado el señor diputado Garófalo se rige, para su solución, por las reglas normales de procedimiento, y al respecto sabemos que deben diferenciarse las costas comunes de las costas por su orden. En el caso que planteaba el señor diputado se trata de costas comunes, es decir, de honorarios de peritos o de otra clase de personas que intervinieron en el juicio. Es evidente que el que tiene que cobrar esas costas tiene el derecho de dirigirse a la parte que más le convenga, que generalmente es la patronal; pero si ésta ha ganado el juicio, luego de haber pagado tiene la acción resarcitoria contra el obrero, que ejercerá en el supuesto de que este último posea la solvencia necesaria. Pero lo que quería señalar es que resulta evidente que, tratándose de costas comunes, existe el derecho de dirigirse contra cualquiera de las partes para su cobro.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — La comisión, por las razones que ha expuesto el señor diputado Rouzaut, mantiene el texto de su despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 54 del dictamen.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 55.

Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Quería preguntar a la comisión por qué, en el texto definitivo que se nos ha propuesto, se han suprimido en la enumeración de las disposiciones legales derogadas la ley 11.278 y el decreto 1.740/45, que se incluían en la primitiva redacción de la comisión, ya que entiendo que todas sus disposiciones están incorporadas a la ley que estamos votando.

Sr. Pena. — La comisión ha preferido usar la fórmula genérica: «Derógase toda otra disposición que se oponga a la presente ley» porque tenía ciertas dudas con respecto, fundamentalmente, a algunas disposiciones de la ley 11.278. Considera que de esta manera no se presenta ningún inconveniente y se soluciona cualquier problema que podría plantearse ante disposiciones que continuaran vigentes a pesar de estar contempladas en la ley general sobre contrato de trabajo.

Sr. González Bergez. — Hubiera preferido más claridad, para que luego no hubiese dudas en la interpretación de la ley, pero tengo que conformarme.

Sr. Hardoy. — Sí; debemos satisfacernos con más dudas todavía.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no se formulan observaciones al artículo 55, se lo dará por aprobado.

— Sin observaciones, se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 56.

— Sin observaciones, se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 57.

— Sin observaciones, se aprueba.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 58.

Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Estamos en el capítulo VIII, que se refiere a interpretación de estas normas. Solicitaría una aclaración al señor miembro informante de la comisión, desde que se nos ha pasado por alto al examinar lo atinente a suspensiones,

si en la mencionada materia se va a seguir el mismo criterio sustentado en el artículo 38, inciso 3º, apartado B), con respecto al despido, en el sentido de que debe hacerse conforme con el orden de antigüedad del trabajador. Es decir, deseo saber si en el caso de las suspensiones éstas también deben ser dispuestas por el empleador con el mismo criterio que se ha adoptado para el caso del despido.

Sr. Pena. — En efecto, tal es el criterio de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se dará lectura del nuevo texto del artículo 58, propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Oliver). — Es el siguiente: «Artículo 58. — Las cláusulas de las convenciones individuales o colectivas que desconozcan o reduzcan derechos garantizados por ley a los trabajadores se reputarán nulas de pleno derecho. Son igualmente nulos los actos simulados o en fraude a la ley que tengan ese objeto. Cuando una convención contenga simultáneamente cláusulas que signifiquen reducciones o ampliaciones de derechos garantizados por ley a los trabajadores, la nulidad alcanzará sólo a las primeras, y las segundas conservarán su validez.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — El párrafo primero del nuevo texto propuesto por la comisión me parece inobjetable. El segundo párrafo me parece superabundante, porque todo está dicho en el primero y porque además los actos simulados no son nulos sino en todo caso anulables.

De modo que incurriríamos en una superabundancia y en un defecto de técnica jurídica muy notable, si el texto se sancionase en sus dos partes. Considero que lo prudente es votar afirmativamente el primer párrafo y renunciar al segundo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿El último párrafo del artículo no le merece observación, señor diputado?

Sr. González Bergez. — Creo que el artículo debería quedar reducido al primer párrafo.

Sr. Pizarro. — Que se lea nuevamente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se va a dar nuevamente lectura del artículo conforme ha sido propuesto por la comisión.

Sr. Secretario (Oliver). — Dice así: «Las cláusulas de las convenciones individuales o colectivas que desconozcan o reduzcan derechos garantizados por ley a los trabajadores, se reputarán nulas de pleno derecho. Son igualmente nulos los actos simulados o en fraude a la ley que tengan ese objeto. Cuando una convención contenga simultáneamente cláusulas que signifiquen reducciones o ampliaciones de derechos garantizados por ley a los trabajadores, la nulidad alcanzará sólo a las primeras y las segundas conservarán su validez.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Respetando la opinión del señor diputado González Bergez que entiendo es acertada en cuanto señala que éstos son actos anulables, entiendo que el legislador ha querido ir más allá e incluso los reputa nulos. No admite, que aun por negligencia del trabajador en ejercitar la acción pudieran subsistir esos actos. Aquí se ha querido establecer, contundentemente, que los actos simulados son actos nulos de nulidad absoluta.

Sr. González Bergez. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Risso. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Estoy de acuerdo con toda la contundencia que la comisión quiera dar a la nulidad, pero cuando haya una simulación no habrá más remedio que probarla. Es decir, el acto no será nulo sino anulable, previo el juicio en que se pruebe la simulación. Y por mucho que la ley diga que es nulo será sin embargo anulable; de manera que no se hace nada más contundente cambiando una palabra por otra sino que se incurre en una inexactitud.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Considero que se están confundiendo dos categorías de actos jurídicos. Los nulos y anulables por una parte, y los que padecen de nulidad absoluta con los que padecen de nulidad relativa, por otro. Los actos que padecen de nulidad relativa son confirmables. Los que caen bajo la nulidad absoluta, nunca. Ello no obstante la necesidad de un procedimiento judicial destinado a descubrir la causa de nulidad, que es lo que ocurre con la simulación o el fraude.

Por eso sería mejor decir que éstos son actos afectados de nulidad absoluta. De lo contrario incurriríamos en un defecto de técnica jurídica y seguiríamos «perfeccionándonos» en el camino del progreso legislativo que hemos emprendido hace algún tiempo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Cuando se habla de acto absolutamente nulo se quiere significar que, una vez demostrada su nulidad, sea ante la autoridad administrativa o judicial, se establecería que nunca tuvo validez, que el acto nunca se cumplió. En cambio el acto anulable ha tenido vigencia, vida, pero luego la pierde en base a la acción que se incoa en su contra. Ese es el sentido de este artículo que sostiene la comisión.

Sr. Hardoy. — Pido la palabra para una brevísima aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Estamos incurriendo en otra confusión.

La nulidad siempre produce el efecto de retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de que el acto se celebrara. En todos los casos surte ese efecto.

Lo que aquí se estaba mencionando por el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra, es introducir en el derecho argentino la categoría de los actos inexistentes, que tiene vigencia en el derecho francés, pero que es un matiz que no acepta nuestra legislación y que la doctrina rechaza porque complica las cosas.

Por eso me parece que lo más lógico es atenernos a la división que yo señalara: nulos y anulables, de nulidad absoluta y relativa. En todo caso hay los que son de nulidad manifiesta, que no precisan ser demostrados.

Pero cuando se trata de simulación o fraude, es inevitable que el acto es anulable y no nulo, porque un juez puede declararlo luego del debido proceso legal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Nos hemos introducido en un veciuto al tratar de determinar qué es nulo y anulable, qué es acto inexistente y qué es acto nulo de nulidad absoluta.

Si bien coincido con el señor diputado Hardoy en cuanto no es acto inexistente lo que estamos tratando, sino algo que se le asemeja, en nuestro derecho es acto nulo de nulidad absoluta, y por eso lo he precisado en mi exposición anterior.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el artículo 58, con el texto propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 108 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración el artículo 59.

Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Este artículo reproduce en otros términos, por supuesto que con fechas actuales, el artículo 3º de la ley 11.729, sancionada en 1933. En aquella oportunidad se establecía que las disposiciones de la ley se declaraban de orden público y se aplicarían a los casos de despido ocurridos desde una fecha anterior, que entonces se fijaba al 1º de agosto de 1933. Ahora se establece al 15 de septiembre de 1965.

El Poder Ejecutivo, en aquella ocasión, devolvió la ley observando el artículo 3º en un mensaje breve y muy denso de contenido jurídico, que el Congreso trató en sus sesiones de 1934. Y entonces se aceptó el veto, luego de un debate sumamente ilustrado, en que los sectores actuantes entonces en la Cámara se pronunciaron por unanimidad.

La situación se reproduce y los argumentos que valieron entonces tienen plena vigencia ahora. Fundamentalmente, se trataba de que

aquella disposición, como ésta, vulneraba principios constitucionales. Decía entonces en su mensaje el Poder Ejecutivo —y podríamos repetirlo ahora— que es muy cierto que la irretroactividad de la ley no es un principio constitucional y que las leyes de orden público, según lo dispone el artículo 59 del Código Civil, tienen efecto retroactivo aun en el caso de existir derechos adquiridos. La irretroactividad es un principio legal y no constitucional.

Pero también hay que hacer notar, como lo hacía notar aquel mensaje, que en determinadas circunstancias el principio de irretroactividad de la ley se convierte en principio constitucional, en cuanto por aplicación de una ley retroactiva pueden vulnerarse derechos definitivamente incorporados al patrimonio y amparados, por consiguiente, por el artículo 17 de la Constitución.

Hay una jurisprudencia abundante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una jurisprudencia igualmente ilustrativa y abundante de la Corte norteamericana sobre textos semejantes, por lo que es fuente de la jurisprudencia argentina, que no parece muy prudente recordar a estas horas de la noche, pero que está mencionada en aquel mensaje del Poder Ejecutivo. De acuerdo con esa jurisprudencia, la palabra «propiedad» es comprensiva de todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer, fuera de sí mismo, de su vida y su libertad. En el sentido que le da esa jurisprudencia, está incorporada la palabra «propiedad» al artículo 17 de la Constitución. Es indudable que cuando, bajo determinada ley, se ha concluido una relación jurídica entre partes y se han fijado determinadas situaciones que significan para alguna de ellas la incorporación a su derecho de potestades de tipo patrimonial, hay de por medio una garantía constitucional que juega en su protección, y vulnerarla sería agravar una norma suprema como es la cláusula constitucional, en este caso el artículo 17.

Sé, señor presidente, que ha hecho camino, entre tantas cosas lamentables que han hecho camino en el país —así le va a este país—, la idea de que la Constitución es más o menos un prejuicio de minorías, casi un prejuicio burgués. Pienso de una manera muy distinta, por supuesto. En primer lugar, porque la Constitución es la ley suprema y en razón de ella el Congreso tiene potestad de legislar y sin ella no la tendría; pero la tiene dentro de los límites que la Constitución le fija y saliéndose de ellos no tiene ninguna potestad.

Pienso además de esa manera, porque gravitan en este caso razones de sentido común que hacen a la necesidad de la estabilidad jurídica. Parece absurdo, no sólo desde un punto de vista estrictamente jurídico, sino desde el punto de vista del sentido común, que quienes han concluido determinadas relaciones jurídicas bajo el imperio de ciertas leyes, que quienes han concluido un contrato o lo han rescindido bajo el

imperio de determinadas leyes, se vean sometidos al hecho de que por una ley posterior se pretenda modificar las situaciones de derecho que habían creado. Es evidente que no sólo se vulneran principios constitucionales, sino también principios de razón elemental; principios que hacen a la estabilidad de todas las negociaciones, porque si es admisible una retroactividad de este tipo —estamos considerando en este momento un proyecto que dispone en su artículo 59 una retroactividad de un mes y medio—, si es válida una retroactividad de un mes y medio, también es válida una retroactividad de cualquier cantidad de tiempo. Podríamos incluso en este momento entrar a analizar y a modificar las relaciones jurídicas que se crearon y terminaron definitivamente en cualquier época del pasado.

Creo que basta sólo con plantear esto así para darse cuenta de cuáles son las enormes consecuencias de lo que se nos propone. Y digo para terminar que la sola invocación del orden público que, sin duda, revisten estas disposiciones, no tanto porque la ley declare que son de orden público cuanto porque en realidad el orden público está alcanzado por las normas que estamos discutiendo y sancionando esta noche, no es bastante para una sanción de este tipo que vulnera una limitación constitucional. Las potestades del Congreso no van más allá, en ningún caso —vuelvo a repetirlo—, exista o no exista de por medio una razón de orden público, de los límites que la propia Constitución fija para el ejercicio de sus atribuciones.

Con esto, señor presidente, en la forma más breve que me ha sido posible, en atención a la hora en que estamos, frente al último artículo de este proyecto que yo tengo la esperanza de que terminemos de discutir esta noche, dejo sentada una propuesta que correrá, como otras que hemos formulado, la suerte que la comisión o la mayoría quieran esta noche; pero yo tengo la seguridad de cuál será la suerte que correrá cuando este asunto sea sometido a los tribunales.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Díaz.

Sr. Díaz. — En homenaje al trabajo que ha efectuado la Honorable Cámara y en procura de que este proyecto se sancione —en lo que estamos contestes todos los señores diputados—, no obstante los argumentos jurídicos que ha aportado el señor diputado González Bergez, conociendo los antecedentes que ha enumerado en lo que respecta al veto de la ley 11.729 en su artículo 39, voy a adherir al despacho de la comisión e incluso voy a solicitar la ampliación del plazo que se ha establecido.

Voy a tratar de ser breve en mis argumentos. Este proyecto, como es de conocimiento público, debió ser tratado con mucha anticipación a la fecha en que lo ha sido. Recordarán los señores diputados que la primera fecha fijada fue el 7 de octubre. De tal manera que la ley se ha ido demorando en su sanción. Pero el hecho real es

que cuando el proyecto fue tratado en comisión y cuando se ha rumoreado que iba a ser considerado por la Cámara, se han producido despidos y ése es también un hecho real. Entiendo que la ley debe tender a reparar esa injusticia; los diputados conocemos bien que se han producido despidos. Yo conozco personalmente situaciones de ese tipo que han tenido lugar como consecuencia de la posibilidad de la sanción de esta ley. Y sobre los argumentos de tipo jurídico, que son muy valederos, tenemos que tratar de reparar estas injusticias.

Por ello, señor presidente, y sin abundar en mayores consideraciones, voy a proponer que el plazo sea ampliado al 1º de agosto del corriente año. Por otra parte voy a sugerir que no se concrete solamente a los despidos injustificados sino que alcance a todos los despidos producidos a partir del 1º de agosto e incluso a aquellos que por una u otra causa no han sido hecho efectivos.

El siguiente es el texto del artículo 59 que propongo a la Honorable Cámara: «Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a los casos de despidos ocurridos a partir del 1º de agosto de 1965 y a los casos en que no hayan sido hechas efectivas las indemnizaciones.» Repito que el artículo enunciado tiene por fin reparar las injusticias que significan los despidos ocurridos como consecuencia de la sanción de este proyecto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Natiello.

Sr. Natiello. — Señor presidente: voy a volver muy brevemente sobre un tema de tipo constitucional que toqué hoy, probablemente cuando el señor diputado González Bergez estaba ausente del recinto, tema que se refería al derecho de propiedad.

Cuando en el artículo 14 se habla del derecho de usar y de disponer de la propiedad, y cuando en el 17 se dice que la propiedad es inviolable, hay, como bien ha dicho el señor diputado González Bergez, un perjuicio que consiste en un doble error. Primero, considerar que el derecho de propiedad es el único derecho con carácter absoluto que existe en la Constitución Nacional. Los demás derechos no tienen carácter absoluto. El de propiedad sí, está por encima de todas las cosas.

El otro error es el de creer que el derecho de propiedad que establece la Constitución se refiere exclusivamente a las estancias y a las vacas, que es el criterio restrictivo. Se equipara el derecho de propiedad de la Constitución con el concepto del dominio del artículo 2.506 del Código Civil, lo que es inadmisibile. El mismo señor diputado González Bergez acaba de decir que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos considera derecho de propiedad a cualquier clase de derecho subjetivo que implique un ordenamiento de intereses.

Por ejemplo, el derecho del locatario a la locación es un derecho de propiedad, tanto como el del locador sobre su inmueble.

Es decir, hay viejos prejuicios que provienen, indudablemente, de una mentalidad anacrónica y cavernícola, como son los reparos que se hacen a este artículo que tiende a favorecer, estableciendo un principio de retroactividad, a un derecho de propiedad que es también el del obrero a no ser desposeído por el patrón. Es justamente el argumento que yo hacía de que cualquier estanciero va a la Corte Suprema y defiende el derecho de propiedad de su estancia, y en cambio el empleado que después de 1955 fue despedido de su modesto puesto público, que tenía asegurado por una ley de estabilidad, no podía alegar en la Corte el derecho de propiedad del empleo. Aquí ocurre como en la fábula bíblica del cordero del pobre. La Corte, las leyes, la Constitución, parecieran estar hechas para el dueño de los grandes rebaños pero no para aquel pobre que tiene una miserable ovejita.

Este es el criterio verdaderamente humano que hay que insuflar a la Constitución Nacional. No se puede estar pensando con el criterio pasatista, pastoril y ganadero de 1853. Los pensamientos evolucionan. Hay que estar dentro de la época.

De manera, pues, que voy a apoyar este artículo, por el criterio moderno y dinámico que significa que las Constituciones, por más escritas que estén, no son estáticas sino que evolucionan con el concepto de los tiempos actuales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Además de adherir a los conceptos vertidos por el señor diputado Natiello, deseo formular una objeción a la redacción de este artículo, pues entiendo que es defectuosa. Dice: «Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a los casos de despido injustificado que se produzcan a partir del 15 de septiembre de 1965.» Entiendo que debe decir «producidos a partir del 15 de septiembre de 1965».

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Acepta la comisión las modificaciones propuestas por los señores diputados Díaz y Risso?

Sr. Pena. — La comisión acepta exclusivamente la modificación propuesta por el señor diputado Risso, porque aclara la redacción. Como no comparte el criterio del señor diputado Díaz, no acepta la modificación que ha propuesto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado González Bergez.

Sr. González Bergez. — Es solamente para hacer una reflexión.

No me extraña —no puedo dejar de decir que también me alegra— que el señor dipu-

tado Natiello se haya colocado para contestarme en el plano del derecho y no en el del sentido común, donde yo quería que colocáramos las cosas. No me extraña tampoco demasiado que en el plano del derecho haya sostenido lo que ha sostenido, porque lo hemos oído en alguna oportunidad sostener que tampoco las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada tenían valor definitivo, y que podían llevarse por delante las leyes.

No creo de ninguna manera, por supuesto, que sea un criterio pasatista, pastoril y ganadero aquel que da importancia y prevalencia en un país jurídicamente organizado a la Constitución Nacional. No me parece que sea más moderno, industrialista y desarrollado el criterio que, por el contrario, supone que no hay ninguna ley suprema que nos obligue a todos por igual y que inclusive condicione y limite las atribuciones de los poderes del Estado.

Quiero decir además una cosa absolutamente concreta. Se dice aquí que con esta cláusula se va a defender mejor a los trabajadores o que se quiere reparar los abusos que se han cometido por parte de los empresarios que presumían que la ley iba a salir, porque se discutía. La verdad es que no se va a proteger nada, ni con la fecha del 15 de septiembre para la retroactividad, ni siquiera si se estableciesen cuarenta y cinco días atrás. ¿Por qué? Porque la Constitución, nos guste o no nos guste, es —como decía alguien con más autoridad que yo— lo que los jueces quieren que sea. El año pasado se sancionó, después de un debate en que sosteníamos estos mismos puntos de vista, una ley que ordenaba la reincorporación de determinados agentes bancarios cesantes. En esa oportunidad dijimos que la ley iba a ser declarada inconstitucional. Nos dijeron que teníamos el prejuicio de la Constitución y que vivíamos inclusive atrasados. Pero luego, cada vez que se ha llevado a los tribunales la ley, ella fue declarada inconstitucional y los presuntos beneficiarios no se han beneficiado sino con oír una cantidad de discursos y han quedado, en definitiva, burlados por la ley que se dictó. En este caso va a ocurrir exactamente lo mismo. La Constitución será, en definitiva, lo que los jueces dicen que es.

Sr. Natiello. — Los jueces son también cavernícolas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

Sr. Ghioldi. — Que se pase lista, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Por Secretaría se pasará lista.

—Mientras se pasa lista:

Sr. Abalo. — ¿Hay número en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Sí, señor diputado. Hay 115 señores diputados en la casa.

En este momento hay número en el recinto.

Se va a votar el artículo 59 del despacho, con la modificación propuesta por el señor diputado Risso y aceptada por la comisión.

—Resulta afirmativa de 88 votos; votan 111 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Me veo obligado a pedir la reconsideración del artículo que se votó como 50 bis segundo, porque en razón de haberse hecho llegar a la Secretaría una copia incompleta, en la lectura se omitió su párrafo final, que no es sino la repetición de una disposición de la ley 15.785. Pido que se reconsidere el artículo y luego se lo vote nuevamente, con ese agregado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Corresponde que la Honorable Cámara resuelva, por dos tercios de votos, si acepta el pedido de reconsideración.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 91 votos; votan 114 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig) — Por Secretaría se dará lectura de la parte final del artículo 50 bis segundo, que no fue votada en su oportunidad.

Sr. Secretario (Oliver). — «Los importes así reservados deberán adicionarse a las reservas ya existentes de acuerdo con las disposiciones legales vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley. Al fondo así formado se imputarán las indemnizaciones que efectivamente se paguen por despidos.»

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—Resulta afirmativa de 100 votos; votan 112 señores diputados.

—El artículo 60 es de forma.

Sr. Presidente (Mor Roig) — Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Hago indicación de que se autorice a la Presidencia, en virtud de que se han agregado algunos artículos al despacho, a ordenarlos en su numeración para remitir inmediatamente el proyecto de ley al Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la indicación del señor diputado Pena.

—Resulta afirmativa de 100 votos; votan 113 señores diputados.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.

4

MOCION

Sr. Alfonsín. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alfonsín.

Sr. Alfonsín. — Hago moción de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 y 30.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar la moción del señor diputado Alfonsín.

— Resulta afirmativa de 100 votos; votan 112 señores diputados.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 15 y 30.

— Se pasa a cuarto intermedio a la hora 23 y 45.

5

APENDICE

SANCION DE LA HONORABLE CAMARA

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

I. — Concepto y ámbito de aplicación

Artículo 1º — Habrá contrato de trabajo, cualquiera fuere su denominación, cuando una persona se obligue a prestar servicios, durante un período determinado o indeterminado, en forma permanente, transitoria o accidental, en relación de dependencia, a cambio de un salario.

Art. 2º — El solo hecho de la prestación de servicios por parte del trabajador, hace presumir el mutuo consentimiento y aplicables las disposiciones de esta ley.

Art. 3º — En caso de duda acerca de la duración de un contrato, se interpretará que éste es de duración indeterminada.

Art. 4º — Las disposiciones de la presente ley no serán aplicables:

- a) A los trabajadores que prestan servicios en organismos dependientes de cualquiera de los tres poderes del Estado nacional y a los empleados públicos de las provincias y los municipios, salvo aquellos cuya relación laboral se halle establecida en convenios colectivos de trabajo o se encuentren, antes de la fecha de su sanción, amparados por la legislación laboral común;

- b) A los trabajadores comprendidos en el decreto ley 326/56.

Art. 5º — En los casos de actividades regidas por estatutos especiales, serán de aplicación las normas de la presente ley, siempre que:

- a) Se refieran a instituciones o beneficios no previstos en aquéllos;
- b) Consagren beneficios superiores a los establecidos en los estatutos especiales.

II. — Derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores

Art. 6º — El trabajador deberá prestar el servicio personalmente, en la forma convenida con el empleador.

Art. 7º — El empleador tendrá derecho, en cuanto no se oponga a disposiciones legales o convencionales o a los usos y costumbres, a establecer reglamentos referentes a la forma en que los trabajadores deberán prestar los servicios y normas sobre disciplina interna.

Art. 8º — El incumplimiento por el trabajador de los reglamentos y normas sobre disciplina, dará derecho al empleador a la aplicación de sanciones disciplinarias, consistentes en apercibimiento o suspensión. Las sanciones deberán graduarse prudentemente, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.

Art. 9º — El trabajador podrá impugnar la aplicación de sanciones disciplinarias. En este caso, si el empleador no acreditare la existencia de causa suficiente, estará obligado a dejar sin efecto la medida y a abonar los salarios que aquél hubiera perdido.

Art. 10. — Toda modificación de las modalidades de prestación del servicio dispuesta por el empleador y no aceptada por el trabajador, dará derecho a éste a considerar rescindido el contrato y, si la medida lo perjudicara material o moralmente, al cobro de las indemnizaciones por despido injustificado.

Art. 11. — El empleador estará obligado a pagar puntual e íntegramente los salarios.

Entiéndese por salario toda remuneración de servicios en dinero, especies, alimentos, uso de habitación, comisiones, habilitaciones y viáticos, excepto, en